



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales

Maestría en Género y Desarrollo

**Consecuencias de la ausencia de reconocimiento legal de la violencia económica
y/o patrimonial en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres**

Trabajo de titulación previo a la
obtención del título de Magister en
Género y Desarrollo

Autora:

Alexandra del Rocío Rivera Orejuela
C.I. 0102099884

Directora:

Mgt. Patricia Verónica Calero Terán
CI 1709150732

Cuenca – Ecuador

17/10/2019



Resumen

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer las consecuencias que para la vida de las mujeres tiene la ausencia de regulación de la violencia económica y patrimonial, en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos económicos.

Se partió de la revisión documental de: Constitución 2008, Convenios Internacionales, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y su Reglamento, e investigaciones realizadas referentes al tema.

La investigación fue cualitativa, se utilizó la técnica de entrevista semi-estructurada aplicada a: víctimas de violencia; a profesionales que laboran en los centros de atención especializados en violencia; y, a operadores de justicia del Cantón Cuenca.

Los resultados de la investigación evidencian el desconocimiento que tienen las mujeres sobre la violencia económica y patrimonial. Además se encontró, que a pesar de que en el Ecuador desde febrero del 2018 la violencia económica y patrimonial fue reconocida como un tipo más de violencia en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, no existen denuncias de violencia económica y patrimonial realizadas en los juzgados, sino que, las denuncias son por violencia psicológica.

La conclusión principal a la que se llega, en respuesta a la pregunta de investigación, es que el reconocimiento de la violencia económica y patrimonial en la ley no garantiza que las mujeres puedan ejercer con total autonomía sus derechos económicos y patrimoniales.

Palabras clave: Violencia económica y patrimonial. Derechos económicos. Autonomía. Empoderamiento. Medidas administrativas de protección.



Abstract

The following research was conducted to promote the awareness of the consequences that the absence of patrimonial and economic violence regulation, the acknowledgment, enjoyment, and exercise of economic rights have in women's life.

The document analysis included the 2008 *Ecuadorian Constitution*, the various *International Treaties* ratified in Ecuador regarding violence against women, the *Criminal Code in force*, the *Integral Organic Law to Prevent and Eradicate Violence against Women*, and research carried out in the field.

To collect data, a qualitative investigation using a semi-structured interview technique was administered. Then, the interviewees were categorized and divided into groups: victims of violence, professionals who work at the attention centers specialized in violence, and justice operators.

The results of the research show the lack of knowledge that women have about economic and patrimonial violence. In addition, even though in Ecuador economic and patrimonial violence was recognized as another type of violence in the *Integral Organic Law to Prevent and Eradicate Violence against Women* since February 2018, it was found that there are no lawsuits of economic and patrimonial violence in the courts. Instead, the accusations are set as psychological violence.

The main conclusion, based on the research question, is that the recognition of economic and patrimonial violence in the law does not guarantee that women can fully exercise their economic rights.

Keywords: Economic and patrimonial violence. Economic rights. Autonomy. Empowerment. Executive protective measures.



Índice de Contenidos

Resumen.....	2
Índice de Contenidos.....	4
Dedicatoria.....	8
Agradecimiento.	9
Introducción.....	10
Capítulo 1.....	15
1. Introducción a la Violencia de Género.....	15
1.1 Tipos de violencia reconocidos en el Ecuador.....	19
1.2 La Violencia Económica	26
1.3 La Violencia Patrimonial.....	29
1.4 Propuestas de Inclusión de la Violencia Patrimonial y Económica en la Legislación Ecuatoriana.....	31
1.5 Avances en la propuesta de Inclusión.....	34
1.6 Retrocesos	42
Capítulo 2.....	44
2. Autonomía, derechos económicos y de propiedad de las mujeres	44
2.1 Autonomía de las mujeres	44
2.2 Autonomía económica y su relación con la violencia de género.....	48
2.3 Derechos Económicos de las mujeres	53
2.4 Dificultades de las Mujeres en el ejercicio de los derechos de propiedad.	58
Capítulo 3.....	61
3. Investigación de campo.....	61
3.1 Metodología.....	61
3.3 Testimonio de víctimas de violencia económica y patrimonial.	69
3.4 Nociones de asesores en temas relativos a violencia económica y patrimonial de los centros de asistencia legal.	72
3.4.1 Resultado de las entrevistas a Psicólogas.	74
3.4.2 Resultados de las entrevistas a Trabajadoras Sociales.	76
3.4.3 Resultados de las entrevistas a Abogadas.	78
3.5 La violencia económica y patrimonial vista desde los operadores de justicia.	81
Capítulo 4.....	88
4. Conclusiones y recomendaciones.	88
4.1 Conclusiones:	88
4.2 Recomendaciones.	90



Referencias Bibliográficas	93
Anexos	96
Anexo 1. Consentimiento Informado.....	96
Anexo 2. Boleta de entrevistas.....	97
Cuestionario para aplicar entrevistas semi-estructuradas	97
1. Guía de preguntas para mujeres que han sufrido violencia económica o patrimonial.....	98
2. Guía de preguntas para las profesionales de los Centros de Atención.....	99
2.1 Guía de preguntas para las profesionales que brindan apoyo legal a mujeres víctimas de violencia de género en el Cantón Cuenca.....	99
2.2 Guía de preguntas para las profesionales que brindan apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia de género en el Cantón Cuenca	100
2.3 Guía de preguntas para las profesionales de la Corporación de Mujer a Mujer que brindan apoyo en trabajo social a mujeres víctimas de violencia de género en el Cantón Cuenca	101
3. Preguntas para operadores de justicia.....	102



Cláusula de Propiedad Intelectual

Alexandra del Rocío Rivera Orejuela, autora del trabajo de titulación “Consecuencias de la ausencia de reconocimiento legal de la violencia económica y/o patrimonial en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 17 de octubre de 2019

Alexandra del Rocío Rivera Orejuela
C.I. 0102099884



Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Alexandra del Rocío Rivera Orejuela, en calidad de autora y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “Consecuencias de la ausencia de reconocimiento legal de la violencia económica y/o patrimonial en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres” de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 17 de octubre de 2019

Alexandra del Rocío Rivera Orejuela
C.I. 0102099884



Dedicatoria.

A las personas más importantes en mi vida, Karla, Camila y Santiago, por todo el apoyo
que me han brindado, por su comprensión y paciencia.

A Santiago, el compañero que elegí, por su paciencia para discutir sobre el tema, porque
a pesar de no coincidir con mis criterios los respeta, porque de una u otra forma aportó
para cumplir con este objetivo.

A mi madre, por su ejemplo de fortaleza.

A todas las mujeres que decidieron decir basta a la violencia.

Alex



Agradecimiento.

A Patricia, que a más de dirigir esta investigación con su conocimiento sobre el tema,
me alentó y motivó para culminarla.

A todas las amigas de la Corporación Mujer a Mujer, con quienes conocí sobre la
violencia económica y patrimonial.

A mis amigas de la Coordinación de Equidad Social y de Género por su apoyo, en
especial a Ximena y Diana con quienes tuve la suerte de compartir las aulas.

A las y los docentes que compartieron sus conocimientos.

A todas las mujeres que compartieron sus vivencias.

A las profesionales de la Casa de Acogida “María Amor” y del Consultorio Jurídico de
la Universidad de Cuenca

A la señora Jueza y al señor Juez de la Sala de Violencia de la Corte de Justicia
Provincial del Azuay.

Alex



Introducción.

La violencia económica y patrimonial es una problemática que ha sido considerada recientemente en la legislación no solo del Ecuador sino de varios países de América Latina y el Caribe, esto en parte por los diversos pronunciamientos sobre la necesidad de considerarla como una más de las violencias que afectan a las mujeres, según lo expresado por Deere, Contreras y Tayman (2014) “Existe una tendencia cada vez mayor a considerar la violencia patrimonial– definida como la violación de los derechos de propiedad de la mujer– entre las formas de violencia contra la mujer, junto con la violencia física, psicológica y sexual.” (p. 2)

En el año 2011, se realiza la primera Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres con el fin de desarrollar un análisis sobre “La Violencia de Género contra las Mujeres en el Ecuador” en la cual a más de los tipos de violencia reconocidos en la legislación (violencia física, psicológica y sexual) se analiza también a la violencia **patrimonial** bajo la consideración de que este tipo de violencia afecta a las mujeres y su reconocimiento es fundamental, tanto para asegurar la protección integral de las mujeres que sufren violencia basada en su género, como para sancionar a sus responsables.

La violencia económica y patrimonial ha sido definida como “toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho” (Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2018, art.10)

La presente investigación pretendió conocer las consecuencias que para la vida de las mujeres tiene la ausencia de regulación de la violencia económica y patrimonial en el



reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos económicos, considerando que en el Ecuador, con la expedición en el año 2018 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres recién se reconoce a ésta como un tipo más de violencia (art. 10 de la citada Ley).

La violencia económica y patrimonial no está dimensionada debido al desconocimiento de la misma, las víctimas de este tipo de violencia sufren no solo el detrimento de sus bienes, sino que en muchas ocasiones, esta violencia impide a las mujeres y a sus dependientes alcanzar una vida digna. Por lo tanto, la investigación se centró en la experiencia vivida por las mujeres de la ciudad de Cuenca que acudieron al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género “Corporación Mujer a Mujer”

EL estudio se realizó utilizando datos y enfoque cualitativo, el método utilizado fue inductivo puesto que el interés fue conocer las experiencias de las mujeres afectadas por la violencia económica y patrimonial, acercarse a sus vivencias, identificar su problemática, para luego determinar las consecuencias que este tipo de violencia ha traído a sus vidas. También se investigó sobre las soluciones planteadas por las asesoras de los centros especializados en atención a víctimas de violencia existentes en Cuenca, para finalmente obtener la visión que sobre este tipo de violencia tienen los prestatarios y prestatarias de justicia del cantón.

La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a mujeres afectadas por la violencia económica y patrimonial, que fueron seleccionadas mediante muestreo intencional. Se buscó que el grupo fuera heterogéneo en cuanto a edad, lugar de residencia, nivel de instrucción, fuentes de ingresos económicos, estado civil, número de dependientes, con un elemento en común, todas son



sobrevivientes de la violencia de género. Se entrevistó también a las profesionales de las dos instituciones especializadas en atención integral a víctimas de violencia que existen en la ciudad de Cuenca (Corporación Mujer a Mujer y Casa de Acogida María Amor). Con la finalidad de ahondar en la investigación, se realizó un acercamiento al Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Cuenca que también brinda atención a mujeres con esta problemática. Finalmente se entrevistó a dos funcionarios que actualmente dirigen dos Juzgados de Violencia del cantón Cuenca.

Todas las entrevistas contaron con una guía de referencia para mantener el hilo conductor del tema, sin embargo, al tratarse de entrevistas semi-estructuradas, se realizaron preguntas espontáneas para profundizar en la información obtenida, se contó con autorización para la grabación de la conversación y se obtuvo el consentimiento informado para la entrevista. Por cuestiones éticas los nombres de las personas que participaron en la investigación son confidenciales.

Se realizó la revisión documental de la Constitución del Ecuador, los Instrumentos Internacionales existentes referentes a temas de Derechos Humanos de las Mujeres, Resoluciones, Leyes, Códigos, propuestas de ley, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y su Reglamento de aplicación, se dio lectura a trabajos sobre el tema de varios investigadores, y, para conocer los aportes desde la ciudad de Cuenca, se revisó la propuesta de Ordenanza para la Prevención, Atención Integral y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Cuenca, documento que se encuentra en análisis para su aprobación en segundo debate por parte del Ilustre Concejo Cantonal.

El presente documento está organizado en cuatro capítulos. En el capítulo 1 se realiza una introducción sobre la violencia de género y su vinculación a una desigual distribución



del poder que afecta la dignidad de la mujer y su vida. Una mujer puede ser víctima de varios tipos de violencia, siendo las más comunes la violencia física, psicológica y sexual, la Constitución de la República del Ecuador garantiza que se contará con procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual. Así también, señala que se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas. Se presentan los conceptos de violencia económica y de violencia patrimonial que han sido adoptados en diversos países de América Latina. Se señaló además, que la violencia económica y patrimonial en el Ecuador apenas es reconocida como un tipo más de violencia a partir de la expedición de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (febrero 2018), sin embargo, la tipificación en el COIP no considera este tipo de violencia para sancionarla, por lo tanto, se debe recurrir a lo establecido en el Código Civil así como valerse de instrumentos que se resuelven en los juzgados de familia para lograr respuestas en estos casos.

El capítulo 2 hace referencia a la autonomía, derechos económicos y de propiedad de las mujeres, desde un enfoque de género. El capítulo da cuenta que las mujeres para poder salir de la violencia requieren fundamentalmente autonomía en su sentido amplio es decir en los ámbitos físico, económico y de toma de decisiones, y que, la autonomía está muy ligada al concepto de empoderamiento que se refiere al proceso de emancipación de las mujeres. Para fines de estudio, se ha analizado la autonomía económica como un pilar fundamental para que las mujeres puedan salir de la violencia, así también se ha establecido que la división sexual del trabajo y el uso del tiempo de las mujeres por la desigual distribución del cuidado afectan principalmente a su autonomía económica y al ejercicio de los derechos económicos y de propiedad. Otro ámbito revisado tiene que ver



con las regulaciones que constan en el Código Civil respecto de la disolución del matrimonio y las uniones de hecho en el Ecuador, respecto a este tema se ha visto que la legislación es neutra al género, la mujer conserva su propiedad individual y la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio o unión de hecho legalizada, sin embargo quedan fuera de la división, los bienes intangibles como pago de pensiones, pagos por liquidaciones de empleos, fondos de cesantía, seguros, entre otros, que no se contemplan como recursos a ser distribuidos a la pareja.

En el capítulo 3 se presentan los resultados del trabajo de campo realizado, tanto en relación con la información documental como respecto de las entrevistas realizadas. Para finalizar se realiza un análisis que permite encontrar las coincidencias o contradicciones que se dan en la realidad de las mujeres cuencanas que han sido víctimas de violencia de género, además se contrarrestó con las opiniones que sobre el tema tienen las profesionales que trabajan en asesoría y atención en los centros mencionados, para terminar analizando los criterios que sobre la violencia económica y patrimonial tienen los operadores de justicia del Cantón.

El capítulo 4 presenta las conclusiones a las que se llega como resultado de la investigación realizada y se proponen algunas recomendaciones.

Las conclusiones planteadas sostienen que el reconocimiento de la violencia económica y patrimonial en la Ley, no garantiza el goce de los derechos económicos de las mujeres, que el desconocimiento de este tipo de violencia impide su denuncia, que la expedición de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres evidentemente implica un avance en cuanto a la garantía de sus derechos económicos, puesto que se define a la violencia económica y patrimonial y se establecen ejes de intervención centrados en la prevención y reparación.



Capítulo 1

1. Introducción a la Violencia de Género.

El Ecuador es uno de los países que en América Latina más se ha preocupado por la protección de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas en su marco normativo. La Constitución ecuatoriana declara al Ecuador como Estado Constitucional de “derechos”, razón por la cual, tiene el reconocimiento de una Constitución de *avanzada* al colocar en el centro de la acción del Estado a los derechos humanos. Así entonces, existe mucha legislación que se ha encaminado a este fin.

Uno de los principios que fundamenta nuestra Carta Magna es el de *igualdad*, los legisladores van más allá de la igualdad ante la ley e incorporan el derecho a la igualdad material y no discriminación. Es así que, reconociendo la discriminación que han venido sufriendo varios grupos de personas a lo largo de la historia, entre ellos las mujeres, y en respuesta a las luchas por parte de organizaciones sociales, han establecido una serie de principios y mecanismos para la realización efectiva de la igualdad, ejemplo de ello es el art. 11 numeral 2 párrafo segundo que determina la obligación del Estado de adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Dentro de este enfoque, la erradicación de la violencia de género en el país ha sido una prioridad, así, se cuenta con el Plan de Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres (2007) que persigue la prevención, protección, sanción y restitución de los derechos de las víctimas de violencia. En la Constitución (2008), en el art. 66 que trata los Derechos de Libertad, se establece el derecho a la integridad personal (física, psíquica, moral y sexual) en los ámbitos público y privado determinando que el Estado Ecuatoriano tiene la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para



prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad.

Las cosas no siempre fueron así, en el Ecuador hasta los años noventa (que se dicta la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia), la violencia ejercida contra las mujeres era considerada un asunto privado, por lo tanto, no estaba catalogada como un problema social y, menos aún como asunto público, por tanto, no era de interés para las políticas públicas. Tanto así era un asunto privado, que las mujeres no tenían la posibilidad de denunciar dicha violencia ya que el Código de Procedimiento Penal prohibía la denuncia entre cónyuges, ascendientes o descendientes. Además, este tipo de violencia no se encontraba tipificada en ninguna ley.

En el año 1980, el Estado ecuatoriano había ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres - CEDAW (que entró en vigencia en 1981), por lo tanto, estaba comprometido éticamente para mejorar la situación de las mujeres. Así también, el Ecuador ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de Belém do Pará (1995), y al suscribir la Plataforma de Acción de Beijing (1995), se comprometió a implementar las políticas necesarias para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, como también para dar atención a las víctimas y asegurar su acceso a la justicia.

En los antecedentes de la Recomendación General No. 19 de la CEDAW (1980), sobre “La violencia contra la Mujer” se menciona que “La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de



derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (parr.1). Y dentro de las observaciones sobre disposiciones concretas, en el párrafo 23 consta que:

La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, incluidas las lesiones, la violación, otras formas de ataque sexual y formas de violencia, violencia mental y de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a mantenerse en relaciones violentas. La negación de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres puede representar una forma de violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad para participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad. (parr.23).

Hablar de violencia contra la mujer, violencia doméstica y violencia de género no es lo mismo. Es común que se utilice violencia doméstica como un sinónimo de violencia contra la mujer, por lo que, es necesario aclarar que la violencia doméstica es aquella que se ejerce en el ámbito familiar o privado y que muchas veces la mujer es un miembro más de los que sufren esta violencia. El reconocer que la violencia hacia la mujer no es una cuestión biológica, ni doméstica, sino de género, ha llevado a que se adopte esta categoría como la más idónea para hablar de la violencia que es ejercida contra la mujer (ya sea por su pareja, expareja o por otras personas inclusive por los Estados) por el solo hecho de ser mujer. La violencia de género contra las mujeres se manifiesta tanto en el ámbito público como el privado y de variadas formas que van desde al abuso físico hasta el sexual, psicológico, y/o económico, manifestándose ocasionalmente todos éstos sobre una misma mujer.

Los estudios sobre violencia permiten afirmar que:

Toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino (Rico, 1996, p.5).

La violencia, cuya raíz etimológica está en el concepto de fuerza, conlleva el uso de la misma para provocar daño, y a su vez nos remite al concepto de poder. La violencia es siempre una forma de demostrar que se ostenta el poder mediante el empleo de la fuerza, sea física, psicológica, económica, política, etc., e implica la existencia de un “superior” y de un “subordinado” (Cagisas, 2000, p.310).

La violencia es un problema estructural que afecta la calidad de vida de las mujeres afectando su dignidad personal.

¿Por qué hablar de violencia de género? Porque es fundamental que se establezca que este tipo de violencia se ejerce hacia una persona “subordinada”, más allá de considerar las diferencias biológicas que puedan haber, sino por la desigualdad real que existe entre hombres y mujeres, la cual se perpetúa a causa de las relaciones asimétricas de poder que se originan en los procesos de socialización y de las construcciones sociales y culturales de las identidades de género.

Pero, mirar la realidad desde una perspectiva de género no significa únicamente considerar las diferencias atribuidas a hombres y mujeres, sino que exige tomar en cuenta la “variedad de formas de interpretación, simbolización y organización de las diferencias sexuales en las relaciones sociales” (Lamas, 1997); pero sobre todo mirar a partir de qué condiciones (sociales/culturales) “se transforma al ser humano de sexo

femenino en sujeto subordinado” (Riquer Fernández y Castro, 2008). En otras palabras, el género no solo cuestiona la existencia de una esencia femenina y masculina, sino la organización social de las relaciones entre sexos y la naturalización de las desigualdades que se establecen entre ellos (Camacho, 2014, p.19).

Como dice Camacho (2014), son: la distribución asimétrica de poder persistente, el rol subordinado, la discriminación y la exclusión de las mujeres, el fundamento de la violencia de género hacia éstas, por lo que se vuelve fundamental dejar de utilizar los términos de violencia doméstica o intrafamiliar como sinónimos de la violencia de género hacia las mujeres, pues éstas, sobre todo aluden al ámbito donde ocurren, ocultando la violencia estructural afianzada debido a las relaciones de poder inequitativas.

1.1 Tipos de violencia reconocidos en el Ecuador.

En lo que respecta al tema de violencia en nuestro país, podemos iniciar diciendo que, la Constitución del Ecuador (2008) aprobada por la Asamblea Constituyente aborda el tema de derechos, así, específicamente en el capítulo sexto se ocupa de los derechos de libertad y se reconoce el derecho a la integridad personal.

Se reconoce y garantizará el derecho a la integridad física, psíquica y sexual de todas las personas, así también, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, para lo cual el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual (Constitución, 2008).

En la Constitución (2008) no se establece una tipología de violencia de género o contra la mujer. Dentro de los Derechos de Protección, se establece que “Toda persona tiene

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión” (art.75). Se manifiesta además que el incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley, en el art. 77 numeral 8 continúa diciendo que “en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.

El art. 81 de la Constitución (2008) garantiza que se contará con procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio, y, los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. En este mismo artículo se señala que se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas.

En la normativa constitucional vigente se ha reiterado el principio de igualdad, así como otros principios y normas establecidas en instrumentos internacionales aceptados y ratificados por el Ecuador, entendiéndose que, de manera formal, se ha superado en gran medida la desigualdad jurídica, subsistiendo sin embargo situaciones discriminatorias visibles en el momento de ejercer los derechos, garantías y libertades consagrados de manera expresa en la Constitución.

Reconocida la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, el Estado debe garantizar protección, así como atención emergente a las víctimas, además de adoptar todas las medidas que sean necesarias para la prevención,



eliminación y sanción de la violencia contra mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad, inclusive se ha planteado la necesidad de la ‘reparación integral’ de las víctimas de violencia, dejándose de lado la visión legalista que solo buscaba la sanción de los victimarios por medio de la administración de justicia.

A continuación se mencionan algunos de los instrumentos normativos que gracias a la lucha de los movimientos de mujeres y la respuesta del Estado han sido aprobados con el fin de alcanzar la igualdad y la garantía de los derechos de las mujeres en el Ecuador, si bien algunos ya no están vigentes, en su momento fueron de suma importancia para los objetivos de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entre éstos están:

- Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (29 de noviembre de 1995).
- Reformas al Código Penal (junio de 2005).
- Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, Niñez y Adolescencia (Decreto Ejecutivo 620 de septiembre 2007).
- Código Orgánico de Salud (2007) demanda atención integral de la violencia basada en el género en el conjunto de unidades de salud, se crea el Manual de procedimientos de aplicación obligatoria en el Sistema Nacional de Salud.
- Plan Nacional de Lucha Contra la Trata
- Plan Nacional Integral de Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo
- El Código Orgánico de la Función Judicial (2009).
- Código Integral Penal de 2014.
- Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018)

El Código Orgánico Integral Penal (2014) en adelante COIP, reconoce a la violencia física, psicológica y sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar así como el

femicidio, dejando sin tipificación otras formas de violencia como son; la violencia política, la violencia económica y patrimonial de las que hablaremos más adelante. El COIP, establece como su finalidad a más de la rehabilitación social de las personas sentenciadas la reparación integral de las víctimas. En la sección segunda, dentro de los Delitos contra la integridad personal, en el párrafo Primero se ocupa de los Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

Artículo. 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera:

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.
2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año.
3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)

Art 158. Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)

En el Parágrafo Segundo, el COIP (2014) cuando se ocupa de la Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar el art. 159 dice “La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días”.

El capítulo tercero del COIP (2014), trata sobre las medidas de protección, y dentro del art. 558 para el caso específico de violencia contra la mujer o miembros del núcleo



familiar, establece la extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar, así también, señala que:

... cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección prevista en este Código, la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la normativa sobre la materia, salvo que ya tenga una pensión... los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y transportar a las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar el parte del caso que será remitido dentro de las veinticuatro horas siguientes a la autoridad competente (s.p).

Lo establecido en el COIP (2014) acerca de la tipificación de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, deroga parte de la ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia vigente desde 1995.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 81 de la Constitución respecto al establecimiento de procedimientos especiales por parte del Estado para garantizar los derechos de las víctimas de violencia contra las mujeres, además se ha desarrollado la Gestión Judicial para la Atención de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, que a su vez está basada en el Código Orgánico de la Función Judicial COFJ reformado por el COIP 2014.

Como ya se había mencionado anteriormente, desde el 2007 se cuenta con el Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres que surge como política de Estado. El Plan tiene 4 ejes estratégicos de trabajo que por su importancia son transcritos a continuación:



Eje estratégico 1: Transformación de patrones socio culturales. Aportar en la transformación del imaginario social y las prácticas que naturalizan la violencia de género, a través de procesos de sensibilización e información que muestren la discriminación hacia la mujer como sustento de relaciones inequitativas y violentas entre hombres y mujeres en todo su ciclo de vida.

Eje estratégico 2: Sistema de protección integral. Garantizar la protección y restitución de derechos de las víctimas de violencia de género, asegurando el diseño y funcionamiento del sistema de protección integral con la institucionalidad y competencias que lo sustentan, los servicios articulados de salud, educación y protección y, presupuestos estables, permanentes y oportunos.

Eje estratégico 3: Acceso a la justicia. Reducir la impunidad a través de garantizar a las víctimas de la violencia de género, el acceso a la justicia con gratuidad, celeridad e intermediación; procesos de investigación no revictimizantes; y, la sanción de los delitos, garantizando que la administración de justicia incorpore en su quehacer la comprensión del derecho a una vida libre de violencia como fundamental.

Eje estratégico 4: Sistema de Registro. Desarrollar sistemáticamente información, cualitativa, así como sustentos tecnológicos sobre la violencia de género en sus distintas manifestaciones, que permita contar y proveer de datos confiables a la institucionalidad pública y privada y, que sirva como sustento para la toma de decisiones y para la elaboración e implementación de políticas generales y sectoriales adecuadas y oportunas (Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, 2007)



Por fines de investigación se consideró a la violencia económica y patrimonial como un tipo más de violencia, esto ocurre, por ejemplo, en la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género (2012).

En el mes de agosto del 2017, el Presidente Constitucional del Ecuador presentó a la Asamblea el Proyecto de Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres para su conocimiento y debate, dicha propuesta de ley fue aprobada en sesión del 25 de noviembre del mismo año y publicada en el registro oficial el 05 de febrero del 2018, en ella se reconocen además de la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica, otros tipos de violencia como **la económica y patrimonial**, la obstétrica, la política, etc.

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018) tiene por objetivo prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en los ámbitos público y privado; sus ejes de intervención son: prevención, atención y protección que se implementan a través del Sistema Nacional Integral para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

1.2 La Violencia Económica

Según lo expuesto, en la legislación ecuatoriana, específicamente en el COIP, no se han reconocido más que los tipos de violencia ya explicados: física, sexual y psicológica, a pesar de que la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres en la que constan otros tipos de violencia como la económica y patrimonial, la obstétrica, la política, etc.

A diario muchas mujeres sufren situaciones (que se podrían considerar violencia económica) como: control de los gastos, restricciones en la disponibilidad de dinero para cubrir necesidades básicas propias y de los miembros de su familia, prohibición de

trabajar, exclusión de la toma de decisiones en cuanto a adquisiciones, uso y control de ganancias de actividades económicas propias de la mujer o del grupo familiar, entre otras, situaciones que han sido tratadas como parte de la violencia psicológica, pero que, no han tenido una resolución efectiva.

Al respecto existen posiciones frente a la necesidad de incluir este tipo de violencia como una categoría particular debido a la frecuencia con que ocurre, puesto que, la falta de tipificación de la violencia económica deja en la indefensión a un gran número de mujeres que han sido afectadas y que no pueden denunciar este tipo de agresión. En algunos países de Latinoamérica se ha tipificado como delito la violencia económica y/o patrimonial, mencionaremos algunos de ellos:

Ley 779 de Nicaragua (2014), Ley Integral contra la violencia hacia las Mujeres y de reformas a la ley No. 641, “Código Penal”, en el art. 8 en el literal e) define la

Violencia patrimonial y económica. Acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción en los objetos, documentos personales, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.

Guatemala desde abril del 2008 cuenta con la Ley contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer, en el art. 8. Establece lo que se debe entender por **Violencia económica.**

Comete el delito de violencia económica contra la mujer quien, dentro del ámbito público o privado, incurra en una conducta comprendida en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos patrimoniales o laborales.
- b) Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de responsabilidad económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza.
- c) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal, o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales.
- d) Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos.
- e) Ejercza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar.

La persona responsable de este delito será sancionada con prisión de cinco a ocho años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias.

En el año 2007 en México se decreta la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las últimas reformas realizadas fueron en el año 2011. Este cuerpo establece los tipos de violencia, destacándose que a más de la violencia física y sexual, define tanto a la violencia patrimonial así como a la **Violencia económica** estableciendo que los actos u omisiones que afecten la supervivencia económica de las víctimas manifestadas a través de limitaciones encaminadas al control del ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. (Ley General de Accesos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007, art.6)

En el 2008 en Colombia fue promulgada la Ley 1257 que busca sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación a la mujer, en su art.2 establece la definición de Violencia contra la Mujer de la siguiente manera “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, **económico o patrimonial** por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad” sean éstos en el ámbito público o en el privado, manifiesta además que de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, y que para efectos de esta ley, se entiende por:

Violencia económica, cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política , señala que esta forma de violencia puede darse en relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas (Ley 1257, 2008, art.2)

Como hemos visto, en la mayoría de estas definiciones se habla del uso abusivo de los recursos, el control del dinero quitando la libertad de manejar los recursos para la satisfacción de las necesidades básicas, situaciones que se dan en una relación de pareja, pero también se habla de los perjuicios económicos que se pueden dar en otras instancias como las laborales.

1.3 La Violencia Patrimonial.

Al igual que lo que ocurre con la violencia económica, la violencia patrimonial no está tipificada en nuestra legislación como un delito, sin embargo afecta a un 16.7% de mujeres, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género que fue realizada en el país en el año 2014. Si bien estos datos en comparación por ejemplo

con la violencia psicológica que reporta un 53,9% son relativamente bajos, visibiliza una realidad que debe ser sancionada para asegurar la igualdad de las mujeres para el ejercicio tanto de los derechos humanos así como de los Derechos Económicos y Sociales.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México (2007) sobre la **Violencia patrimonial** dice

Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. (Ley General de Accesos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007, art.6)

En Costa Rica la Ley Contra la Violencia Doméstica (2011) en su Art.2 define a la **Violencia patrimonial** como “Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades ...

Cabe aclarar que el término patrimonio hace referencia a los bienes y derechos de propiedad de las personas de las cuales se acredite su propiedad, estaríamos hablando de: su casa, su terreno, su finca o quinta, su vehículo, sus obras de arte, sus joyas (considerados como un respaldo económico) sus cuentas bancarias, sus inversiones en acciones o bonos, el dinero prestado a terceros, así como, los bienes muebles como es el caso de electrodomésticos y demás enseres domésticos, aunque en la mayoría de los casos, estos pudieran parecer irrelevantes, no sólo por su poco valor sino por su pérdida de valor o deterioro, pero que sirven a la persona en su vida diaria.

Por lo tanto identificar y visibilizar la violencia patrimonial es muy importante, como dice Camacho (2014) “La consideración de este tipo de violencia es fundamental, tanto para asegurar la protección integral de las mujeres que sufren violencia basada en su género, como para sancionar a sus responsables. De ahí que haya sido incluida en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres”

Los datos de la Encuesta mencionada señalan que:

el 10,7% de mujeres han vivido violencia patrimonial por parte de su actual o de anteriores parejas, en tanto uno o más de ellos han destruido, tirado o escondido cosas personales de la mujer o del hogar, o se han apropiado o despojado de su dinero o de sus bienes. Con estas acciones lo que pretenden esposos, novios y convivientes es dejar desprotegida a la mujer, restarle autonomía y la posibilidad de actuar para romper con la relación, o poner fin a la violencia (Camacho, 2014).

1.4 Propuestas de Inclusión de la Violencia Patrimonial y Económica en la Legislación Ecuatoriana

Según Deere (2010) hay una tendencia por incluir a la violencia patrimonial entre las formas de violencia contra la mujer, dado que está relacionada con las otras formas de violencia y en sí misma constituye una violación a los derechos humanos de la mujer. Países como Argentina, México, Costa Rica y Venezuela han incorporado este concepto y han incluido sanciones penales por estos hechos.

Legalmente, hombres y mujeres tienen los mismos derechos de propiedad en Ecuador, los cuales varían o cambian según el estado civil. En la práctica, las distinciones se derivan de las diferencias de género –asociadas a los roles sociales definidos para hombres y mujeres, así como de sus capacidades y oportunidades-. La mayoría, aunque no todas las disposiciones legales, son neutras, es decir, independientes del género. (Deere, 2010)

El art. 81 de la Constitución vigente determina que:

La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad tienen la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano...(Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Los resultados de la aplicación de la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género (2012), muestran datos importantes sobre los tipos de violencia como son la física, la psicológica y la sexual, pero la novedad es que en esta encuesta se incorpora como parte de la investigación a la violencia patrimonial, tomando la definición de la Convención Belén do Para “La transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas”

Según la citada encuesta, en el Ecuador el 53,9% de mujeres sufre violencia psicológica, seguida de la violencia física con un 38.0%, en tercer lugar está la violencia sexual con un 25.7%, en tanto que la violencia patrimonial tiene el menor porcentaje con un 16.7%. Del total de mujeres que han sufrido violencia patrimonial, el 61.0% afirma haberla recibido de su pareja o expareja y el 39.0% de otras personas. Un 22.0% de las mujeres que han vivido violencia de género, no se ha separado porque no tiene como sostenerse económicamente. Del total de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género y que se separaron o divorciaron de su pareja, el 27.1% se fue de la casa en la que vivían; y, de éstas, al 34.2% su pareja o ex pareja le quitó sus pertenencias, el 12.4% no habían llegado a ningún acuerdo y el 16.1% se quedó con los bienes.

La violencia patrimonial y violencia económica son otras formas de agresión que las mujeres viven permanentemente, la intención de los agresores es sobre todo mantener el control y la subordinación de las mujeres, de esta forma se aseguran de la permanencia de las víctimas en el espacio y bajo las condiciones que ellos determinan. Con respecto a la necesidad de incorporar a la violencia patrimonial y económica como tipos de violencia en la legislación ecuatoriana, se han dado algunos avances. El 11 de julio del 2017, la Asamblea Nacional resuelve condenar la violencia ejercida contra niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador determinando que, la erradicación de la violencia de género es un asunto prioritario que requiere de políticas públicas para ser combatido, pues, se lo reconoce como un problema estructural naturalizado en la sociedad ecuatoriana.

En agosto del mismo año, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres (7 asambleístas mujeres) presenta el Proyecto de “Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres” el que es calificado por el Consejo de Administración Legislativa. En el mismo mes, el Presidente de la República Lcdo. Lenin Moreno también presenta un Proyecto de “Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres”. Para el análisis de los dos proyectos se forma una Comisión Especializada Ocasional que deberá unificar las propuestas de ley.

La comisión realiza la socialización en diferentes localidades del país para recibir aportes y sugerencias, así también realiza reuniones técnicas con asesores de la Comisión así como con delegados de los asambleístas.

La Comisión recibió delegados de varias organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, representantes de ONGs y representantes del sector público, destacándose la participación de delegados de otros países que con su experiencia hicieron aportes al proyecto de ley en mención, con la presencia de los delegados de España, Colombia,

Paraguay y Bolivia, así como con la representante de ComVoMujer-GIZ, se realizó un Foro Internacional para abordar la temática de la implementación de una Ley en materia de violencia, el cual contó con la participación de unas 350 personas.

Con todos estos aportes el día 7 de noviembre, la Comisión presenta al Presidente de la Asamblea el Informe para Primer Debate del Proyecto de “Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres”

1.5 Avances en la propuesta de Inclusión.

Como ya se ha manifestado a lo largo del presente documento, existe la necesidad de incorporar a las violencias económica y patrimonial como tipos de violencia de género contra las mujeres, ya que son una realidad palpada diariamente por muchas mujeres. Los movimientos de mujeres han exigido que se cumpla con lo establecido en la Constitución (2008) que dice “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar,..Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley.”(art.81)

La incorporación de estos tipos de violencia en la Ley, a más de buscar sanción para los agresores y que la impunidad cese, pretende que las mujeres consigan no solo la igualdad formal sino la igualdad real.

El art. 2 de la CEDAW, compromete a los Estados parte a condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas y adoptar las medidas apropiadas para eliminarla, entre ellas:

...

- b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación

...

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer (art.2)

La Plataforma de Acción de Beijing, establece como Objetivo Estratégico D1 la necesidad de “Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer”, además se plantea:

c) Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad;

d) Adoptar o aplicar las leyes pertinentes, y revisarlas y analizarlas periódicamente a fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables; adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia, el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación de los daños causados, la indemnización y la curación de las víctimas y la rehabilitación de los agresores.

Se considera que en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), existe un claro avance pues se han incorporado algunos tipos más de violencias. En su art. 10, en **Tipos de violencia**, se establecen los siguientes:

a) Violencia física....

b) Violencia psicológica....

c) Violencia Sexual....

d) **Violencia económica y patrimonial.**- Es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho, a través de:

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o inmuebles;

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;

4. La limitación o control de sus ingresos; y,

5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

e) Violencia simbólica.....

f) Violencia política....

g) Violencia gineco-obstétrica. (art.10).

Como se puede observar, en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el art. 10 literal d) consta lo que para efectos de ésta, se considera violencia económica y patrimonial, es decir, se ha unificado en un solo concepto lo que son la violencia económica y la violencia patrimonial, en los numerales 1 y 2 se explica lo que se podría considerar como violencia patrimonial y en los numerales 3, 4 y 5 se describen la violencia económica.

El art. 11 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), al explicar la Concurrencia de Violencias, manifiesta que, la violencia contra las mujeres definidas en esta Ley, pueden ocasionarse en contra de una misma persona simultáneamente y en un mismo contexto, así como, en uno o varios ámbitos.

Así también, en el art 12 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018) se determinan los **Ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres**, es decir, los espacios y contextos en los cuales se desarrollan los tipos de violencia:

- a) Intrafamiliar o doméstico.- Es aquella violencia que se ejerce contra las mujeres en el núcleo familiar, ejecutada por el cónyuge, la pareja en unión de hecho, el conviviente, los ascendientes, las hermanas, los hermanos, los parientes por consanguinidad y afinidad, y personas con las que la víctima mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación;
- b) Educativo.- Es aquella violencia ejercida contra las mujeres, en el contexto de la enseñanza y aprendizaje, por docentes, personal administrativo, compañeros u otro miembro de la comunidad educativa en todos los niveles.

c) Laboral.- Es aquella violencia que se ejerce por las personas que tienen un vínculo o convivencia laboral con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el trabajo realizado, e igual remuneración por igual tarea o función. El impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de gestación y lactancia.

d) Estatal e Institucional.- Es la violencia manifestada en el ejercicio de la potestad estatal de manera expresa o tácita y que se traduce en acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende toda acción u omisión de instituciones, personas jurídicas, servidoras y servidores públicos o de personal de instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo u organización, que incumpliendo sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y sus servicios derivados; y, a que ejerzan los derechos previstos en esta Ley.

e) Mediático y cibernético.- Es cualquier forma de violencia contra las mujeres que se ejecuta a través de un medio de comunicación masivo o comunitario, formal o informal, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo a las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro.

f) En el espacio público o comunitario.- Es aquella acción física o verbal, de connotación sexual no consentida, de manera individual o colectiva, que afecte la seguridad e integridad de las mujeres niñas y adolescentes en lugares o espacios públicos, privados de acceso público, espacios de convivencia barrial o comunitaria, transporte público y otros de uso común tanto rural como urbano.

g) Emergencias y situaciones humanitarias.- Toda acción u omisión ejercida en contextos de emergencia y desastres que promuevan las desigualdades entre hombres y mujeres, que pongan en riesgo la integridad física, psicológica y sexual de mujeres, niñas y adolescentes.

Para que se cumplan los objetivos de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es sumamente importante, que el Estado garantice la provisión y erogación oportuna de los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pero que además se cumpla lo establecido acerca del **Sostenimiento del Sistema**, “las Instituciones del Sistema, a través del presupuesto asignado por el ente rector de las Finanzas Públicas, priorizaran la implementación de esta Ley, el cual estará incorporado en el Clasificador Orientador del Gasto en Políticas de Igualdad de Género” (art.17).

Por lo expuesto, objetivamente hay un avance en la inclusión de la violencia económica y patrimonial en el Ecuador, sin embargo, existe una debilidad para sancionar a los agresores, ya que para ello, se debe realizar una analogía entre el Código Civil, el Código de trabajo y el COIP para determinar las sanciones correspondiente y en ninguno de estos se tipifica la violencia económica y patrimonial.

La Ley no contempla la valoración económica a todo el trabajo doméstico y de cuidado que las mujeres realizan en sus hogares, los cuales son un gran aporte a la economía familiar y que no se ven reflejados el momento de una separación y el consiguiente trámite para fijar las pensiones alimenticias y alimentos congruos.

Las reformas al COIP sobre los temas de violencia a las mujeres tuvieron posiciones a favor y otras en contra, los movimientos de mujeres dividieron sus criterios, por lo que, como una iniciativa de la Asamblea Nacional con el Apoyo de ONU Mujeres se conformó

la Mesa Técnica para que las mujeres argumenten y plasmen sus propuestas con respecto al contenido de la legislación penal ajustada a los estándares internacionales pero sobre todo a las necesidades de las mujeres, así la Mesa Técnica se reunió en Quito, en ella participaron expertas que trabajan en la atención a víctimas de violencia, a continuación se mencionan algunos de los aportes específicos en relación a la violencia económica y la violencia patrimonial:

Agréguese a continuación del artículo 158, los siguientes artículos:

Art. ...- Violencia económica contra la mujer.- será sancionado con pena privativa de la libertad de uno a tres años, la persona que realizare actos encaminados a limitar, controlar o impedir a una mujer el ingreso de sus percepciones económicas, incurriendo en una o más de las siguientes conductas:

- a) Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos;
- b) Ejercer violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar;
- c) Sustraiga las ganancias derivadas de una actividad económica familiar o disponga de ellas para su exclusivo beneficio personal y en perjuicio de los derechos de la mujer.

Art.- Violencia patrimonial contra la mujer.- será sancionado con pena privativa de la libertad de uno a tres años, la persona que realizare actos encaminados a afectar la libre disposición del patrimonio de la mujer, incurriendo en una o más de las siguientes conductas:

- a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos patrimoniales o laborales;

- b) Ocasione daños a los bienes comunes o propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos personales;
- c) Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de responsabilidad económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza;
- d) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal, o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales. (Terán, 2016, p.16)

Las integrantes de la Mesa Técnica argumentan la necesidad de la inclusión del articulado precedente en las siguientes razones;

- Las mujeres desisten de iniciar un determinado proceso por su situación de dependencia. Las parejas se aprovechan de que son los proveedores, esto es violencia patrimonial.
- En la violencia económica tener claro que no se da solamente en el ámbito familiar, sino en otros ámbitos de la vida de las mujeres, tiene que ver con las relaciones de poder, limitando la libertad de la víctima no solo económica sino en la integralidad de su vida, el daño.
- La violencia patrimonial también abarca todo lo que es patrimonio de la mujer: pasaporte, libros, tiene que ver con son aquellos bienes que constituyen el patrimonio tangible e intangible de las mujeres, inclusive que tienen valor sentimental.

En general estas formas de violencia sufren todas las mujeres, a pesar de que se encuentra invisibilizado. (Terán, 2016, p.12)



1.6 Retrocesos.

El COIP en lo que respecta al asunto de violencia contra la mujer ha sido muy criticado por grupos feministas que consideran como un retroceso para la lucha de las mujeres, pues insisten en que el COIP no protege a las mujeres de manera oportuna, y las somete a un proceso de revictimización, que no hay fuero especial para los delitos de violencia intrafamiliar, ni jueces, ni procedimientos especializados. La principal crítica es que existen artículos en el COIP que tienden a colocar la violencia de género y los delitos comunes en el mismo nivel. Varias propuestas de reforma versan sobre los problemas de aplicación de la ley en los casos de violencia a las mujeres, pero en general, los problemas de los que se hablan están relacionados con la violencia física y psicológica.

Con la Reforma Judicial, que inició en julio del 2011, se crearon unidades para el juzgamiento de contravenciones en violencia intrafamiliar que reemplazaron a las Comisarías de la Mujer y la Familia creadas en 1994. Entre julio y septiembre del 2013 empezaron a operar veintiocho Unidades de Violencia contra la Mujer y Familia (UVMF), ubicadas en veinticuatro cantones de dieciocho provincias. Los casos de violencia hasta entonces eran conocidos por las Comisarías Nacionales o las Tenencias Políticas, estas instancias desaparecieron o ya no tienen competencia para hacerlo, por lo que según el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) la transición dejó vacíos. Hasta junio del 2014, cincuenta y ocho cantones de los 221, aún no tenían ninguna judicatura que atendiera estos casos, dejando a las mujeres víctimas de violencia de las zonas rurales y de cantones apartados en indefensión. (Informe Sombra al Comité de la Cedaw Ecuador, 2014).

En lo que respecta al tema de la presente investigación, la violencia económica y la violencia patrimonial, no se considera que existan retrocesos, ya que por ejemplo, en la



Ley 103 se reconocía la violencia patrimonial como una forma de violencia psicológica. Entonces, que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e considere a la violencia económica y patrimonial como un tipo de violencia contra las mujeres es un avance, claro está, que se debe seguir trabajando para que este tipo de violencia tenga una sanción efectiva.

Capítulo 2

2. Autonomía, derechos económicos y de propiedad de las mujeres

La violencia contra las mujeres tiene serios impactos en sus vidas y en el normal desarrollo de sus familias, situación que inclusive afecta el desarrollo de toda la sociedad; algunos de sus efectos directos son por ejemplo: la pérdida de autonomía y la imposibilidad de realizar un efectivo ejercicio de sus derechos económicos, hecho que conlleva al empobrecimiento de las mujeres.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en adelante CEPAL), señala que un principio fundamental del concepto de desarrollo sostenible es la igualdad, pero destaca que debe ser la igualdad real, tanto para la titularidad así como para el ejercicio de los derechos, y, que esto se logra básicamente con la autonomía de las mujeres. La CEPAL (2019) también manifiesta la importancia de realizar cambios estructurales que susciten generación de empleo óptimo, capacitación y desarrollo de nuevas tecnologías.

2.1 Autonomía de las mujeres.

La autonomía entendida como “la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles” (CEPAL, 2011), es un factor fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad y en este sentido una condición para la superación de las injusticias de género. La autonomía se convierte en un elemento central para alcanzar la igualdad... (CEPAL, 2016, p. 36)

Entonces, si se considera que la autonomía es esencial para alcanzar la igualdad, como lo menciona Fernández (como se citó en ONU, 2005) es necesario comprender que este concepto político implica:

... la capacidad de instituir proyectos propios y la producción de acciones deliberadas (voluntad) para lograrlos, es decir subjetivarse como sujetos. Sujetos capaces de discernir sus deseos y sus intereses y de elegir las mejores acciones para concretar dichas elecciones. En el caso de la autonomía de género estamos hablando del grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. En tal sentido, hay una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente.

En realidad, el grado de autonomía de un sujeto singular es inseparable del grado de autonomía del grupo social al que pertenece. Es decir, el grado de autonomía personal que una mujer pueda desplegar dependerá también de la autonomía posible de su grupo social y de aquella que las mujeres de la sociedad a la que pertenece hayan alcanzado. En síntesis, la autonomía de un grupo social no depende exclusivamente de la voluntad personal de quienes a él pertenecen. Para que alguien pueda saber qué quiere en su vida y cómo lograrlo, que se sienta con derecho a decir no, a incidir en su realidad para lograr sus proyectos, necesita un tipo de subjetividad cuya construcción no depende exclusivamente de su psiquismo. Entran en juego aquí condiciones de posibilidad histórico-sociales de gran complejidad, y bueno es reconocerlo, de lenta y difícil modificación. (p. 114)

Hablar de autonomía de las mujeres, implica considerar necesariamente tres dimensiones que la componen: autonomía económica, autonomía física, y autonomía política; y, considerar que además éstas se interrelacionan e inciden una sobre las otras.

Las mujeres para contar con total autonomía requieren integrar en sus vidas el control sobre el propio cuerpo, tomar decisiones libres sobre su sexualidad, reproducción y una



vida libre de violencia (autonomía física); lo que a su vez permite que puedan ejercer en los ámbitos: laboral; profesional; comercial; etc., una autonomía económica que les genere ingresos propios y adecuados sobre los cuales puedan decidir, pero que además puedan tener control sobre activos y recursos, y por último, que tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en cuanto a la toma de decisiones que van desde el ámbito personal, pasando por el comunitario hasta llegar al político.

Las autonomías, no pueden ser vistas por separado, pues ellas se entretajan para formar un sistema complejo que debe ser abordado de manera integral, el concepto de autonomía está muy ligado al concepto de empoderamiento, pudiendo llegar a confundirse, por lo que es necesario diferenciar la autonomía del empoderamiento, al respecto, la CEPAL (2015) dice:

La autonomía de las mujeres —tanto en la vida privada como en la esfera pública— es fundamental para garantizar el respeto, ejercicio y goce de sus derechos humanos y para lograr la igualdad. El empoderamiento y la autonomía de las mujeres son procesos individuales y políticos que es importante diferenciar. El empoderamiento se refiere al proceso de emancipación y alude a la subjetividad individual y colectiva de las mujeres que intentan actuar como sujetos sociales en la vida pública. La autonomía alude a la capacidad que tienen las personas para actuar de acuerdo con su propia elección y no con la de otros; es el resultado del empoderamiento y, a la vez, lo refuerza; la autonomía es relativa al contexto y al grado de desarrollo de una sociedad. El empoderamiento amplifica las voces de las mujeres y se expresa en la capacidad de incidencia política, mientras que la autonomía es el resultado de los cambios producidos en la sociedad tanto en la ampliación de sus espacios de libertad como en la reducción de las brechas de desigualdad. (p. 23)

Para fines del presente estudio, a pesar de considerar que la autonomía debe ser contemplada en sus tres áreas (física, económica y política) se realizará el análisis de la autonomía económica y su relación con la violencia de género hacia las mujeres.

Por lo anotado, es fundamental entender que la autonomía económica se ve afectada principalmente por la división sexual del trabajo y el uso del tiempo de las mujeres por la desigual distribución del cuidado.

La CIDH (2011) en su Informe sobre el Trabajo, la Educación y los Recursos de las Mujeres manifiesta que, la división sexual del trabajo incide directamente sobre la autonomía económica de las mujeres puesto que limita las posibilidades de generar ingresos así como el acceso y control de los recursos, hecho que incide directamente en la feminización de la pobreza (agravada en mujeres viudas, separadas o jefas de hogar). Además, la división sexual del trabajo afecta el uso del tiempo de las mujeres por la sobrecarga de tareas que tienen que cumplir, limita sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral o a puestos de dirección que implican mayor dedicación de tiempo. En definitiva, la división sexual del trabajo restringe de manera grave el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en todas las esferas: económica, social, civil y política.

La división sexual del trabajo, como una categoría de análisis, permite ver la subordinación de las mujeres y la menor valoración que se da a las labores femeninas y la sobrecarga que tienen las mujeres cuando además de las labores reproductivas asumen labores productivas. La designación a las mujeres como responsables directas de las labores domésticas y de cuidado es tan “naturalizada”, que esto impide a las mujeres decidir libremente su incorporación al mercado laboral afectando de esta forma su autonomía económica. Las labores de cuidado, pueden ser definidas como las acciones

que una persona realiza a favor de otra u otras personas en busca de su bienestar, por lo tanto, se puede dar entre dos o más personas, implica una relación directa entre seres humanos, el cuidado generalmente se da en el ámbito familiar y es realizado de manera gratuita, en este tipo de relación, no hay un reconocimiento económico por las actividades de cuidado, pero también el cuidado puede ser brindado por personas ajenas del círculo familiar que cobran por esta actividad.

Se ha visto que, cuando las mujeres carecen de autonomía económica, puesto que se han dedicado a las tareas de cuidado o trabajo del hogar no remunerado, tienen mayores dificultades para salir de la violencia, pues dependen de sus agresores para satisfacer tanto sus necesidades como las de sus dependientes. A continuación presentaremos esta relación, así mismo, se visibilizará la violencia ejercida desde el Estado, aquella violencia que no se ve, de la cual no se habla.

2.2 Autonomía económica y su relación con la violencia de género

La autonomía económica es un pilar fundamental de la autonomía de las mujeres y, por definición, requiere que éstas perciban ingresos que les permitan superar la pobreza y disponer de su tiempo libremente para capacitarse, acceder al mercado laboral, desarrollarse profesional y personalmente, participar de manera activa de la vida social y política, y dedicarse a sus seres queridos sin que ello se transforme en una barrera para el logro de sus propias aspiraciones. Los ingresos monetarios y el tiempo son recursos finitos y muchas veces escasos; la evidencia empírica indica que no se reparten en forma igualitaria en los hogares, como tampoco en la sociedad. Las mujeres tienen menor acceso al dinero y a otros recursos productivos como la tierra, la capacitación y las tecnologías. A su vez, disponen menos de su propio tiempo por dedicarse al cuidado y el bienestar cotidiano de los miembros de sus familias. Esto

atenta contra su autonomía y no permite alcanzar la igualdad distributiva en los hogares ni en la sociedad en su conjunto. (CEPAL, 2016, p.39)

Concordando con lo expuesto en CEPAL (2016), cualquier persona en nuestra sociedad indispensablemente debe contar con ingresos propios para poder ejercer su autonomía económica, de esta forma no se verá obligada a depender de terceros para satisfacer sus necesidades propias y de otras personas a su cargo (hijos e hijas, padre o madre, etc.) sin embargo, para las mujeres, la realidad no siempre es así, a pesar de que cuenten con ingresos propios no pueden ejercer total autonomía, debido a que los ingresos de las mujeres generalmente son bajos, apenas son una base para su subsistencia y no les permiten ejercer una autonomía plena desde el punto de vista económico.

Como se manifiesta en CEPAL (2016), un desafío para los Estados es lograr la igualdad distributiva de las mujeres en busca de mejorar sus condiciones de vida y superar la pobreza (tanto de ingresos monetarios así como de disponibilidad de tiempo), se tiene que lograr igual remuneración por igual trabajo y superar las brechas de protección social (que es una de las formas de violencia del Estado que aun no se visibiliza).

Según datos del INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU (2012) del total de la población en edad de trabajar (personas mayores a 10 años), el 57,6% está conformada por mujeres frente a un 42.4% de hombres, presentándose una brecha de 15.2%, este dato puede ser utilizado como un indicador para visibilizar la proporción de mujeres que no tienen autonomía económica, por lo tanto, no tienen ingresos y no cuentan con seguridad social que las proteja en su vejez, circunstancias que las pone en una posición de vulnerabilidad.

Como se manifestó anteriormente, una de las causas por las cuales las mujeres en un alto porcentaje no cuentan con ingresos, es porque realizan el trabajo de cuidado que,



tradicionalmente recae sobre las ellas, ésta es una labor invisibilizada y subvalorada, asignada por la división sexual del trabajo, que cuando no es remunerada limita la autonomía de las mujeres y las circunscribe al ámbito de dependencia económica de terceros.

Cuando el trabajo de cuidado es remunerado, normalmente se lo considera como una labor no calificada por lo tanto es mal pagada y, a pesar de los avances legislativos sobre el tema, que aún es realizada de una manera informal.

En el Ecuador se han dado avances para el reconocimiento de las labores que realizan las mujeres. La Constitución (2008) en su art. 325 reconoce “todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano” así también en el art. 326 numeral 4 señala que “a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración” asegurando así que las remuneraciones sean equitativas, en el art. 332 se garantizan los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, se prohíbe el despido de mujeres embarazadas, se garantizan los derechos de maternidad, lactancia, se reconoce el derecho a licencia por paternidad y se prohíbe la discriminación vinculada a roles reproductivos.

Aunque existen progresos en cuanto a la normativa, como por ejemplo que a las trabajadoras remuneradas del hogar se les reconozca el salario básico unificado con aporte patronal para seguridad social, o que se haya promulgado la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar (2015) que, establece un valor mínimo de aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para las personas que realizan



trabajo del hogar no remunerado, aún persiste discriminación salarial y de acceso a trabajo decente por parte de las mujeres en el Ecuador.

La brecha que existe en el acceso al trabajo, como se verá, no se debe a la formación de las mujeres, pues como lo manifiestan Albuja y Enríquez (2018) refiriéndose a los resultados comparados entre el 2007 y el 2016, de la asistencia a nivel nacional de las mujeres tanto a educación general básica así como al bachillerato, los porcentajes han aumentado de forma evidente pasando de 91,8 a 96,6%, y de 55,2 a 73,4 respectivamente. A 2016, el porcentaje de asistencia de las mujeres a instituciones de bachillerato es superior en cuatro puntos a los hombres que asisten. Además señalan que “La tasa de asistencia a educación superior en las mujeres es de 33,2% frente a los hombres con 29,8%.” (s.p.)

Uno de los mayores retos planteados a nivel mundial, es disminuir las brechas de género entre hombres y mujeres, afirman los autores antes referidos. Esto coincide con lo señalado por el Foro Económico Mundial 2018, según el cual la brecha global de género tardará en cerrarse aproximadamente cien años, a pesar de todo el esfuerzo realizado por organizaciones femeninas, organismos internacionales y los Estados nacionales, en tanto que, la brecha de acceso al mercado laboral se calcula cerrará en 217 años, debido principalmente a los obstáculos para la inserción y a la inestabilidad laboral que experimentan las mujeres.

Albuja y Enríquez (2018) sostienen que se puede ver con facilidad la discriminación ocupacional debido a que, entre las principales actividades que realizan las mujeres están las de servicios como: enseñanza, venta de comida, alojamiento, que se consideran femeninas, en tanto que los hombres trabajan principalmente en áreas como la construcción y transporte, que son consideradas masculinas. Esta forma de especializar

el trabajo según el sexo de quién lo realiza se deriva de la cultura y los roles del hogar. Esta división es la que, a la larga, afecta directamente la economía de las mujeres pues como ya se ha dicho, este tipo de trabajo es menos valorado socialmente por lo tanto mal pagado.

Los resultados de la “Encuesta de uso del tiempo” (INEC) realizada en 2012, dan cuenta que el 93,1% de la población realiza trabajo no remunerado en los hogares, los hombres alcanzan el 89% frente al 97% de las mujeres presentando una diferencia de 8 puntos porcentuales; 9 de cada 10 hombres semanalmente dedican 6 horas de su tiempo a actividades de trabajo no remunerado, en tanto que, las mujeres destinan más de 18 horas semanales. Esta mayor dedicación de tiempo de las mujeres a trabajos en el hogar impide la conciliación entre el trabajo remunerado y no remunerado imposibilitando que éstas puedan acceder a trabajos en condiciones óptimas (Albuja y Enríquez, 2018).

Finalmente, concordando con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2011) frente a la importancia de tomar las medidas necesarias para lograr el acceso y control de recursos económicos por parte de las mujeres, la eliminación de la discriminación, y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres.

El acceso y control de recursos por parte de las mujeres incide en sus roles económicos en cuanto al sustento del hogar, en los mercados laborales, y en la economía en general. Por otra parte, los ingresos independientes de las mujeres mejoran el bienestar de sus familias y comunidades, reducen la pobreza y estimula el crecimiento económico. Asimismo, el acceso y control de recursos por parte de las mujeres contribuye a la autonomía y empoderamiento de las mujeres, conceptos que permiten comprender mejor el derecho que tienen las mujeres de obtener ingresos propios, de controlarlos y

de negociar con las demás personas, incluyendo sus parejas, empleadores, autoridades, y otras personas con las que interactúan, sobre su destino. La CIDH asimismo reitera que el acceso y control de recursos es esencial para el goce pleno de otros derechos fundamentales de las mujeres como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y contribuye al goce de las mujeres de su derecho a vivir una vida libre de violencia. (OEA, 2011, p. xvii)

En definitiva, y conforme sostiene la CIDH, la violencia económica y patrimonial afecta el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y su supervivencia, debido que limita el acceso a los recursos para su manutención. En esta situación se encuentran muchas mujeres que son madres a cargo del cuidado de sus descendientes, quienes no solo que se enfrentan a esta forma de violencia sino que además no cuentan con la pensión alimenticia a la que tienen derecho sus hijos e hijas, conforme el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud, o aquellas que viviendo con sus parejas no tienen acceso ni control de los recursos familiares, todo lo cual limita su autonomía económica.

2.3 Derechos Económicos de las mujeres

La CIDH manifiesta que la base para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es la autonomía, por lo tanto, ésta se convierte en un elemento transversal al momento de ver el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, de igual forma, la Comisión “reconoce la protección de los derechos económicos de las mujeres — libre de toda forma de discriminación — como un componente indispensable de la eliminación de la pobreza, la protección general de los derechos humanos, y la consolidación de los regímenes democráticos”. (OEA, 2011, pp. 91,92)



Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (en adelante ACNUDH), referirse a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante DESC), necesariamente implica hablar de derechos humanos concernientes a: trabajo, seguridad social, vida familiar y cultural, vivienda, alimentación, acceso al agua, la atención de salud, y, acceso a educación.

Los DESC según lo manifestado por ACNUDH, (2009) entre otros abarcan: el derecho a condiciones laborales adecuadas, la prohibición del trabajo forzado, la libre elección para ejercer un trabajo, equidad salarial que implica igual trabajo por igual valor, limitación en las horas de trabajo y derecho a tiempo libre, derecho a la huelga y a la formación de sindicatos, seguridad e higiene en el trabajo, derecho a la seguridad social, protección en caso de enfermedad, desempleo y vejez; protección a la familia, derecho a contraer matrimonio libremente, protección a la maternidad, paternidad y explotación económica y social de los hijos; derecho a un adecuado nivel de vida, con derecho a una alimentación adecuada y protección contra el hambre, una vivienda digna, derecho al agua y a la vestimenta; el derecho a la salud que implica el acceso a infraestructura y servicios de salud, protección contra las enfermedades epidémicas, condiciones ambientales saludables, así como, los derechos pertinentes a la salud sexual y reproductiva; derecho a la educación: básica gratuita y superior generalizada, accesible y progresivamente gratuita, el derecho de los padres de escoger la educación para sus hijos; por último los derechos culturales que permitan participar en la vida cultural, a ser partícipes de los adelantos científicos y sus beneficios.

Al ser reconocidos los DESC como parte de los derechos humanos, los Estados están obligados a garantizar que sus habitantes puedan gozarlos y en caso de que sean impedidos de hacerlo, deben asegurar los medios para su exigencia, uno de estos

mecanismos (a nivel internacional) lo constituye el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (C-PIDESC) que es el organismo que acoge las quejas de las personas que habiendo cumplido con todas las instancias de reclamación en el país de residencia, y al no obtener una solución satisfactoria, acuden a este organismo para presentar el reclamo por sus derechos vulnerados.

En CEPAL (2016) se afirma que la agenda regional de género avanza y sienta bases para incluir el reconocimiento de nuevos derechos —como es el caso del cuidado y, en las últimas décadas, los derechos sexuales y reproductivos— como parte de los derechos humanos, así como la existencia de violaciones de estos derechos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012) encargada de velar por los derechos de las y los trabajadores, desde su creación promueve la no discriminación y la igualdad como principios fundamentales que buscan el trabajo digno no sólo para quienes trabajan en la economía formal, sino también, para aquellas personas que realizan trabajos de forma: independiente, eventual e informal. Pero además considera a quienes realizan prestación de cuidados en el ámbito privado de su hogar, donde principalmente se ubican las mujeres. En materia de igualdad de género, ha dictado el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Núm. 100), el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (Núm. 111), el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (Núm. 156), el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (Núm. 183), y el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (Núm. 189).

Las normas internacionales del trabajo (convenios y recomendaciones) constituyen una de las vías fundamentales de acción de la OIT para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas de uno y otro sexo y promover la igualdad en el lugar de



trabajo para todos los trabajadores. Todas las normas de la OIT, a excepción de algunas, específicamente las relativas a la maternidad y a la función reproductiva de la mujer, son aplicables tanto a los hombres como a las mujeres. No obstante, sigue habiendo una brecha entre los derechos establecidos en las normas nacionales e internacionales y la situación real de los trabajadores. Estos derechos deben llevarse a la práctica. El principal obstáculo que impide que los trabajadores ejerzan sus derechos es la falta de conocimiento de los mismos. Por lo tanto, un elemento crucial para mejorar la igualdad entre el hombre y la mujer es la divulgación de información sobre dichos derechos. La presente publicación constituye un elemento de dicho proceso de divulgación; agrupa de forma accesible una serie de normas internacionales del trabajo de particular importancia para la promoción de la igualdad de género en el mundo del trabajo. (OIT, 2012, p.v)

Como se afirma en CEPAL (2016) la agenda regional de género con los avances alcanzados sienta las bases para el reconocimiento de nuevos derechos, como es el caso del cuidado y de los derechos sexuales y reproductivos. En cuanto al tema del cuidado, los debates han versado sobre: la contribución económica de quienes realizan este trabajo y la necesidad de que las personas que lo realizan (generalmente mujeres) tengan Seguridad Social (Consenso de Lima); la conciliación entre el trabajo y la vida en familia tanto para hombres como para mujeres y el reconocimiento del cuidado como un trabajo (Consenso de México, D.F.); la redefinición de la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico como aporte para la economía, el trabajo de cuidado como un asunto de competencia Estatal, empresarial y familiar (Consenso de Quito); la valoración del cuidado como aporte a las cuentas nacionales, definición de políticas universales de cuidado y de protección social para las trabajadoras domésticas y las personas encargadas

del cuidado (Brasilia) y considerar al cuidado como bien público así como un derecho, el cual requiere que se de una redistribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres, el mercado, la sociedad y el Estado.

Las deficiencias de las políticas sociales y el incumplimiento de las obligaciones estatales respecto de los derechos económicos y sociales tienen un impacto diferenciado y desproporcionado sobre las mujeres. En efecto, la falta de vivienda, atención en salud, alimentación y trabajo aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las exponen a la violencia, la explotación y el abuso. (Parra, 2015, p. 251)

La CEDAW en su art. 11 determina que los Estados Parte deberán tomar las medidas que sean necesarias para eliminar la discriminación a fin de asegurar a la mujer igualdad con los hombres en la esfera del empleo, en especial con respecto al derecho al trabajo, oportunidades de acceso con iguales criterios de selección, libertad de elección tanto de profesión como empleo, estabilidad laboral y cobertura de seguridad social (desempleo, enfermedad, invalidez, jubilación), promoción de la salud inclusive la salud reproductiva, derecho a las promociones o ascenso, capacitación, formación y adiestramiento, igual remuneración por igual trabajo, vacaciones pagadas, evaluaciones en igualdad de condiciones. Para evitar la discriminación por matrimonio o maternidad de manera de garantizar el derecho al trabajo, se prohíbe los despidos a mujeres embarazadas; a aquellas que se encuentren en el período concedido como licencia por maternidad (período que debe ser pagado y con beneficios sociales); así también, se prohíbe el despido como consecuencia del estado civil. Se incita la creación de servicios sociales de apoyo para el cuidado de niños y niñas de manera que los padres combinen las obligaciones familiares con el trabajo y la participación política y social. Promueve además la protección especial de la mujer embarazada en trabajos que se pruebe son

perjudiciales para ella. Toda legislación de protección relacionada con este artículo deberá examinarse de forma periódica de acuerdo a avances científicos y tecnológicos de manera de revisarla, derogarla o ampliarla. (pp. 24-25)

La CIDH (2011) en su Informe sobre el Trabajo, la Educación y los Recursos de las Mujeres; en el título III numeral 3 literal f) referente al acceso a vivienda segura, párrafo 323 manifiesta que “el derecho de las mujeres a una vivienda segura va más allá de tener un techo sobre la cabeza, e incluye el derecho a vivir libre de violencia, en seguridad, paz y dignidad” así también en el párrafo 324 “indica que la dependencia económica y el no tener un lugar para vivir más que el hogar compartido con el agresor es un obstáculo clave para que una mujer quiebre una relación violenta”. (p. 115)

2.4 Dificultades de las Mujeres en el ejercicio de los derechos de propiedad.

Para abordar este tema, es necesario aclarar los conceptos jurídicos de ‘derecho a la propiedad’ —consagrado en el numeral 26 del art. 66 de la Constitución— frente al de ‘derecho de propiedad’ —definido en el art. 599 del Código Civil— puesto que, el primero garantiza el acceso a la propiedad de un bien, la titularidad de un bien corporal o incorporal, así como, a disponer de él y de los derechos y acciones correspondientes, al ser parte de los derechos fundamentales son inherentes a todos los seres humanos; en tanto que el segundo, es la facultad que se ejerce en concreto sobre un bien específico, son derechos singulares establecidos para quienes específicamente son titulares de un bien, que adquieren la facultad de gravar con derechos o poner limitaciones a ese bien. Los derechos patrimoniales a diferencia de los derechos fundamentales son mutables, variables y acumulables, y se extinguen con la desaparición del bien. (Andrade, 2016)

Una vez aclarado el concepto de los derechos de propiedad vemos que lo establecido en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres



(2018) art. 10 literal d, guarda completa relación con la afectación que puede ocasionarse a la mujer para ejercer sus derechos de propiedad, pues, este artículo define la violencia económica y patrimonial como toda acción u omisión que menoscabe los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres incluidos los adquiridos en la sociedad conyugal o sociedad de bienes de las uniones de hecho.

La legislación ecuatoriana no restringe los derechos de propiedad de las mujeres, existe una igualdad formal ante la ley, sin embargo, las mujeres se ven limitadas en el ejercicio de los derechos de propiedad más bien por las costumbres, la discriminación, los estereotipos y los roles de género que el patriarcado ha institucionalizado en la sociedad.

Como lo señala Naciones Unidas (2006) refiriéndose a los logros en la mejora de “la condición económica de las mujeres en numerosos países, numerosas mujeres siguen haciendo frente a la discriminación en los sectores formal e informal de la economía, así como a la explotación económica dentro de la familia.” (p. 36). Manifiesta además que las mujeres tienen poco empoderamiento económico que “se refleja en la falta de acceso y control respecto de recursos económicos tales como la tierra y los bienes muebles, el salario y el crédito”...“el acceso a los recursos económicos puede incrementar la capacidad de las mujeres de hacer opciones significativas, en particular escapar de situaciones de violencia y obtener acceso a mecanismos de protección y reparación.” (p. 37).

Exceptuando la venta de la fuerza de trabajo, el medio que a una persona le permite obtener ingresos es la propiedad de bienes físicos y financieros conocidos como activos. Los activos físicos son los bienes muebles e inmuebles como casas, vehículos, equipos y electrodomésticos; en tanto que los activos financieros son las cuentas en bancos, cooperativas, acciones o bonos, etc. La propiedad de estos activos constituye el



patrimonio de la persona y en el caso de las mujeres es un elemento fundamental para su empoderamiento.



Capítulo 3

3. Investigación de campo

3.1 Metodología.

La presente investigación como objetivo principal pretendió conocer las consecuencias que para la vida de las mujeres tiene la ausencia de la regulación de la violencia económica y patrimonial para el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos económicos. Por lo tanto, la investigación fue cualitativa y la muestra intencional.

Para alcanzar el objetivo de la investigación se optó por entrevistar a tres grupos de personas involucradas en el tema: 1. Mujeres víctimas de violencia económica y patrimonial que acudieron a la Corporación Mujer a Mujer (Centro de Atención Integral a víctimas de violencia intrafamiliar y de género) durante el año 2016. 2. Profesionales que laboran en los centros de atención a víctimas de violencia en Cuenca (Corporación Mujer a Mujer y la Fundación María Amor y Consultorio Jurídico de la Universidad de Cuenca) para conocer sus actuaciones y criterios sobre el tema. 3. Para conocer la actuación de los prestatarios de justicia sobre el tema objeto de estudio, se entrevistó a un juez y a una jueza de las salas de Violencia

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de entrevista semi estructurada, puesto que la intención de la técnica es dar la posibilidad a las personas entrevistadas de manifestarse libremente sobre los temas consultados, se contó con una guía de preguntas para cada grupo de personas a ser entrevistadas, lo cual permitió obtener información diferenciada por cada grupo, lo que a su vez facilitó el análisis de la información según la categorización realizada: víctimas, profesionales-asesores y operadores de justicia.



Cuando la situación lo requirió, se realizaron preguntas espontáneas para profundizar en cierta información que se consideró relevante para el estudio.

Las mujeres entrevistadas fueron contactadas gracias al apoyo de las profesionales de la Corporación Mujer a Mujer, puesto que todas ellas fueron atendidas en este centro, se realizó un acercamiento vía telefónica, se explicó el objetivo de la investigación y cuando se tuvo el consentimiento, se realizó un cronograma de entrevistas que en algunos casos no se cumplió porque la intención fue respetar los tiempos de las entrevistadas. Las entrevistas duraron entre 45' a una hora, desde el inicio de las reuniones se buscó empatía considerando que el tema a tratar provocaría recuerdos dolorosos. Las entrevistas fueron grabadas y se cuenta con el consentimiento firmado.

Las profesionales entrevistadas laboran tanto en la Corporación Mujer a Mujer y en la Fundación María Amor, los dos centros que brindan atención especializada a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, en el caso de la Corporación se entrevistó a todo el personal que ahí trabaja (abogada, psicóloga, trabajadora social y Directora del Centro), mientras que en la Fundación María Amor se pudo realizar la entrevista a la Psicóloga y a la Trabajadora Social, puesto que en ese momento por la rotación del personal no contaban con una abogada especializada en casos de violencia. También se logró un acercamiento con la Técnica Docente Asesora que trabaja con las y los estudiantes que realizan las prácticas pre-profesionales en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Cuenca, todas las profesionales fueron informadas del tema investigado y firmaron el consentimiento para obtener la información.

Se realizó un acercamiento a un Juez de la Sala de Violencia que a su vez recomendó realizar la entrevista a una compañera del Juzgado, estos funcionarios fueron informados

del tema investigado y aceptaron la entrevista grabada mediante su consentimiento firmado.

La información recolectada en las entrevistas grabadas fue transcrita de manera que facilitara el análisis de acuerdo con las variables propuestas.

La investigación propuso los siguientes objetivos específicos:

1. Establecer los avances y obstáculos para la inclusión de la violencia económica y/o patrimonial en el marco jurídico ecuatoriano.
2. Conocer las percepciones de las mujeres afectadas por la violencia económica y/o patrimonial sobre las respuestas encontradas en las instituciones garantes de la protección de derechos.
3. Identificar las acciones implementadas por organizaciones de asistencia y servicios públicos especializados en violencia contra la mujer frente a los casos de violencia económica y/o patrimonial que experimentan las mujeres.
4. Analizar las decisiones y/o medidas que dictan las instituciones garantes de la protección de derechos frente a casos de violencia económica y/o patrimonial denunciados.

El estudio realizado partió de las particularidades de las experiencias de las actoras que intervinieron para luego llegar a conclusiones generales, por lo tanto fue inductiva. Así también, el presente trabajo se basó en el enfoque de derechos humanos y de género para identificar las relaciones de “poder” que se manifiestan en la violencia hacia las mujeres.

Con la finalidad de conocer las experiencias que sobre la violencia económica y patrimonial han tenido las mujeres en toda su diversidad, así como, las percepciones que tienen sobre las respuestas dadas por las instituciones garantes de derechos, la selección



de las entrevistadas se realizó utilizando la técnica de muestras tipo; en el caso de este estudio, la muestra se orientó hacia mujeres sobrevivientes de violencia, que debían cumplir con las siguientes características: que tengan diferente edad, que vivan en diferentes áreas de Cuenca (urbana y rural), que tengan diferente nivel de instrucción y educación, que sus ingresos provengan de diferentes fuentes (empleo y emprendimiento). Para la selección de las mujeres a ser entrevistadas se acudió a uno de los Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Corporación Mujer a Mujer. El perfil de las mujeres a las que se aplicó la entrevista, considerando los parámetros señalados son:

- Una estudiante universitaria de 21 años, no trabaja, vive en la casa que su madre arrienda en el centro urbano de Cuenca con su hija de 2,5 años.
- Una mujer de 39 años, profesional en diseño, que labora desde su casa en un emprendimiento, aporta al IESS con afiliación voluntaria, vive en un departamento con su hija de 3 años en la zona urbana de Cuenca.
- Una mujer de 52 años, que vive acogida por su hermana en la zona rural con dos hijos adolescentes, que combina sus labores de crianza de animales con el trabajo doméstico remunerado, no cuenta con afiliación al Seguro Social.
- Una mujer de 63 años, que vive sola en su casa en Sayausí que pertenece al área rural de Cuenca, trabaja prestando sus servicios como empleada doméstica a tiempo completo, tiene afiliación al Seguro Social.

Las mujeres seleccionadas representan la pluralidad de mujeres (urbanas y rurales) que acuden al Centro de Atención, sus edades, conforme puede observarse van desde la adolescencia hasta la edad adulta, sus niveles de instrucción van desde educación básica incompleta hasta la instrucción universitaria completa, con una diversidad de



ocupaciones, formas de trabajo y obtención de recursos para la subsistencia. Los nombres de las mujeres entrevistadas y demás información personal, por consideraciones éticas no se presentan.

En cuanto a las profesionales entrevistadas, a fin de conocer el trabajo que se lleva adelante desde las instituciones especializadas en violencia de la ciudad de Cuenca y las acciones que se realizan desde estos espacios para enfrentar los casos de violencia económica y patrimonial de sus usuarias, se optó por entrevistar a todo el personal que labora en la Corporación Mujer a Mujer que es un Centro de Atención para mujeres víctimas de violencia, en razón de que tiene 25 años de experiencia en el trabajo de atención integral (legal, psicológica y de trabajo Social) a mujeres víctimas de violencia de la ciudad de Cuenca y parroquias rurales del Cantón. Se entrevistó también a la trabajadora social y a la psicóloga de la Casa de Acogida María Amor, institución que trabaja con mujeres que debido a la violencia sufrida han tenido que abandonar sus hogares. Y por último se entrevistó a una abogada que labora haciendo el acompañamiento a los estudiantes que cumplen con sus prácticas pre-profesionales en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Cuenca.

Para obtener la información de las y los servidores de la Función Judicial, se contractó a jueces que actualmente trabajan en las Salas de Violencia de Cuenca que tienen formación en género.

3.2 Avances para la inclusión de la violencia económica y patrimonial en la legislación ecuatoriana

El primero objetivo específico planteado para la presente investigación proponía establecer los avances u obstáculos para la inclusión de la violencia económica y patrimonial en la legislación ecuatoriana, por lo tanto, en este apartado se mencionan los avances encontrados a raíz de la inclusión de este tipo de



violencia en la Ley Orgánica Integral para Prevenir la Violencia contra las Mujeres en el año 2018

Es así que, se encontró como un avance que entre las medidas de protección inmediata que pueden ser dictadas a favor de las víctimas, que tienen como fin, detener o cesar la violencia, para el caso de la violencia económica y patrimonial, tanto la Ley Orgánica Integral para Prevenir la Violencia contra las Mujeres como su Reglamento prevén:

Prohibir a la persona agresora el ocultamiento o retención de bienes o documentos de propiedad de la víctima de violencia; y en caso de haberlos ocultado o retenido, ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la mujer víctima de violencia o personas que dependan de ella;

Disponer, cuando sea necesario, la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales o salariales. (Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2018, artículo 51; l) y k); y Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2018, art.45; 8) y 9))

Lo mencionado en párrafos anteriores, permite observar los avances que existen en cuanto a la protección de las mujeres víctimas de violencia, ya que el otorgamiento de las medidas de prevención y protección son inmediatas, no requieren de un patrocinio legal, las puede solicitar la presunta víctima de violencia económica o cualquier otra persona que conozca de los hechos de violencia o amenaza, además, pueden ser solicitadas como ya se había mencionado, en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias políticas y Comisarías Nacionales de Policía.



Cuenca se caracteriza por la constante preocupación de trabajar en temas de igualdad y eliminación de la violencia, es así que, ha sido pionera en asuntos de protección y eliminación de la violencia. El movimiento de mujeres a través del Cabildo de las Mujeres de Cuenca ha jugado un papel muy importante en este tema.

En el año 1999 se articula la Red Interinstitucional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar RIAP-VIF; en el año 2001 con la participación activa de organizaciones sociales, de mujeres, instituciones públicas y privadas se elabora el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2001-2004, como resultado de este trabajo coordinado, se creó el Departamento por la Equidad Social de Género (actualmente Coordinación por la Equidad Social y de Género) para dar seguimiento a la ejecución del Plan. En el año 2002 se aprueba la Ordenanza que establece las Políticas, tendientes a Prevenir y Erradicar la Violencia Intrafamiliar en el cantón Cuenca; en el año 2003 se construye el Primer Plan Cantonal de Cuenca para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres; en el año 2006 se construye el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2006-2020, en el año 2011 se implementa la Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia Intrafamiliar y de Género, la que se institucionaliza en el año 2013 mediante Resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca; en el año 2016 se realiza la Actualización del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y Hombres 2016-2020. Finalmente en el año 2018, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca a través de su Coordinación de Equidad Social y de Género en coordinación con el Cabildo de las Mujeres de Cuenca, vienen trabajando una propuesta de Ordenanza para la Prevención, Atención Integral y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Cuenca, que en la actualidad se



encuentra presentada para segunda y definitiva discusión en el Ilustre Concejo Cantonal. De este documento se han tomado los estratos relativos al tema de investigación.

En cuanto a la Reparación, la propuesta de Ordenanza establece que se realice la coordinación de las Instituciones del Sistema Cantonal Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres con instituciones públicas y privadas para la generación de proyectos productivos y de empoderamiento económico dirigidos a mujeres en situación de violencia, lo cual aportará para la consecución de autonomía económica. (Propuesta de Ordenanza para la Prevención, Atención Integral y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Cuenca, 2019)

En el mismo sentido, se establece la responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Productivo y de la Empresa de Desarrollo Económico de Cuenca EDEC EP, para:

- a) Elaborar y ejecutar programas y proyectos con enfoque de género para el fortalecimiento, desarrollo económico, emprendimiento, empleo y formación en competencias laborales y profesionales, dirigidos a mujeres en situación de violencia, con pertinencia cultural y atendiendo las particularidades de mujeres embarazadas, en condición de movilidad humana y diversidades sexo genéricas.
- b) ...
- c) Impulsar una red de alianzas estratégicas, que permita brindar oportunidades laborales de manera prioritaria a mujeres en situación de violencia.
- d) Articular y coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y redes la elaboración y ejecución de programas y proyectos de

desarrollo productivo con enfoque de género para mujeres víctimas de violencia en los territorios rurales.

e) Garantizar espacios de cuidado de niños, niñas y personas dependientes de la asistencia de las mujeres víctimas de violencia en los procesos de capacitación. (Propuesta de Ordenanza para la Prevención, Atención Integral y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Cuenca, 2019, art. 40)

3.3 Testimonio de víctimas de violencia económica y patrimonial.

La muestra estuvo constituida por mujeres que fueron atendidas en la Corporación Mujer a Mujer desde el año 2016; como ya se explicó, se seleccionaron para las entrevistas informantes que representen la diversidad de mujeres que acuden a la institución utilizando para ello la técnica de muestras tipo. A estas mujeres con características diferentes pero con una condición semejante, que hayan sido víctimas de violencia, se explicó el objetivo de la investigación, se aplicó la entrevista y se solicitó su consentimiento para utilizar la información confidencial que ellas brindaron para establecer a partir de ésta conclusiones generales.

La boleta de entrevista contiene preguntas abiertas que sirven de guía, cuidando que, no se limite la respuesta y que además posibilite a las mujeres contar sus historias sin forzar un discurso, en algunos casos se requirió realizar más preguntas que permitan profundizar la explicación.

El análisis de la información se basó en tres variables: tipo de violencia sufrida, apoyo solicitado y recibido desde la Corporación Mujer a Mujer, Acciones legales emprendidas frente a la violencia económica y patrimonial sufrida. Se considera que estas variables permitirán encontrar las consecuencias de la falta de reconocimiento legal de la violencia económica y patrimonial

Tipo de violencia: Todas las mujeres entrevistadas han sido víctimas de violencia física y psicológica (reconocida por ellas), según sus relatos, en un primer momento, ninguna reconoció que estaban también sufriendo violencia económica y patrimonial, (fue luego de la intervención realizada por las profesionales del Centro quienes les dieron la explicación de los tipos de violencia que ellas identificaron que a más de la violencia física y psicológica estaban afectadas por la violencia económica y patrimonial).

Apoyo solicitado y recibido: Las mujeres entrevistadas llegaron a la Corporación Mujer a Mujer debido a la violencia física y psicológica de las cuales eran víctimas, lo que solicitaban era atención psicológica y asesoría legal.

Todas recibieron atención psicológica por más de dos años, también contaron con asesoría y patrocinio legal para emprender acciones que salvaguarden su integridad personal en un primer momento, posteriormente recibieron apoyo para emprender acciones como demandar por la pensión alimenticia y divorcio.

Ninguna de las mujeres que acudió al Centro identificó una vulneración económica ni patrimonial en la primera acogida.

Dos de las mujeres sobrevivieron a intentos de femicidio (arma blanca y ahorcamiento), ésta situación fue la que les obligó a pedir apoyo primero legal para poner la denuncia y luego psicológico para poder salir de su estado depresivo, de dependencia y de culpabilidad.

“... *“sí he tenido como decir la violencia física de parte de él. El hecho de que yo tuve una hija sin casarme ósea fui madre soltera, entonces para él fue eso el único pretexto de tratarme mal, de decirme que soy de todo lo que malo que podía haber,*



incluso me decía que soy una ramera, prostituta que sólo las mujeres así tienen hijos sin casarse” (A. Faicán, comunicación personal, 21 de febrero de 2019)

“...me mandó sacando él ya no quiso verme en la casa... el día que yo salí de la casa porque últimamente me cogió ahorcarme así mismo estuvo borracho... yo estaba sola no sabía que hacerme y de eso decidí mejor, ya que voy a estar aguantando, así he vivido 30 años el maltrato que tuve, él tomaba mucho... y ponía el fin de semana a tomar y a portarse mal en la casa y hacer la bulla hacer el escándalo” (M. Loja, comunicación personal, 23 de febrero de 2019)

“...a veces encontraba que había roto las cosas mías y de mi hija, las cosas de la casa, rompía lo que él quería, una vez encontré la refrigeradora tirada en el piso, él consumía (alcohol y droga) en la casa, yo no sabía que eso era también violencia, una vez me dijo que él era bipolar, yo aguantaba porque no quería que mi hija crezca sin su padre, me pedía dinero prestado que nunca me devolvió... yo antes trabajaba en una empresa pero salí porque él me decía que íbamos a trabajar juntos, pero nunca trabajó, antes de que nazca mi hija no me importaba, pero luego empezaron más los problemas porque yo le pedía que sea responsable con nuestra hija, estando drogado dos veces me puso el cuchillo, una vez en la barriga y otra en el cuello” (A. Jaramillo, comunicación personal, 22 de febrero de 2019)

Las mujeres entrevistadas luego de recibir atención psicológica han podido salir adelante, manifiestan que actualmente están tranquilas con sus hijos, que por fin pueden disfrutar de sus hogares sin gritos, maltratos físicos y penurias económicas pues todas están trabajando ya sea por cuenta propia (limpieza de casas, emprendimiento con manualidades y diseño, en una empresa, prestando sus servicios profesionales, etc.), dos de ellas reciben la pensión alimenticia legal mínima para sus hijas (ciento once dólares)

pero indican que eso no es suficiente para los gastos que las niñas representan, sin embargo prefieren no tener ningún problema con sus exparejas.

Ninguna de las entrevistadas ha realizado acciones legales para recibir resarcimiento por sus pérdidas económicas (dinero “prestado”, daños a electrodomésticos, salir de la casa en la que invirtieron dinero, daños de objetos de uso personal, no recibir pensión alimenticia para sus hijos, etc.) ni cuando estuvieron junto a sus agresores ni ahora que ya conocen que los daños ocasionados son violencia económica y patrimonial, no ven posibilidades de obtener nada y no quieren volver a tramites que les ocasionan mayores problemas no solo con sus exparejas sino además con los familiares de éstos.

En definitiva, que la violencia económica y patrimonial esté reconocida o no en la ley, no garantiza a las mujeres víctimas de violencia, una reparación de los daños económicos y psicológicos experimentados, como consecuencia, las mujeres se sienten desprotegidas y resignadas a no recuperar los bienes materiales perdidos, mucho menos a recibir una compensación económica por los daños sufridos.

3.4 Nociones de asesores en temas relativos a violencia económica y patrimonial de los centros de asistencia legal.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la entrevista era indagar respecto al conocimiento, experiencias y acciones de personas que realizan atención de violencia, se realizó un acercamiento a profesionales que prestan sus servicios para brindar atención integral, es decir, en el área de trabajo social, psicología y legal. Se aclaró a las profesionales que la entrevista es voluntaria y el uso de la información recolectada es confidencial, se cuenta con la respectiva autorización para que la entrevista sea realizada.

La Corporación Mujer a Mujer es un Centro de atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género que viene trabajando en Cuenca desde el año 1993. A



este centro acuden mujeres de diferentes sectores en busca de apoyo para salir del círculo de violencia en el que han vivido, las profesionales que laboran en la Corporación realizan una intervención integral en los casos que se considera ameritan este tratamiento, es así que abogadas, psicólogas y trabajadora social intervienen desde su formación y experticia para buscar las soluciones adecuadas a cada caso. Sin embargo, no todas las mujeres tienen que pasar por el proceso integral, entonces, dependiendo de las necesidades de las mujeres, una vez realizada la primera acogida se trabaja indistintamente en el apoyo legal o psicológico. En la Corporación Mujer a Mujer, se entrevistó a tres abogadas, dos psicólogas y a una trabajadora social.

Con el objetivo de contar con más criterios sobre los casos de violencia que se presentan en la ciudad, también se entrevistó a las profesionales del área de psicología y trabajo social que prestan atención en la Casa de Acogida María Amor, en esta institución no se realizó la entrevista a la profesional de derecho debido a la rotación de personal, la persona actualmente a cargo de esta área no tiene aún la experiencia de trabajo necesaria (según versión obtenida).

Por último, se aplicó una entrevista a la Técnica Docente que realiza asesoría, representación en las audiencias, seguimiento de los casos y acompañamiento a los estudiantes del último año de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca, quienes como requisito para la obtención de su título como Abogados de la República deben cumplir con prácticas pre-profesionales en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Ciudad de Cuenca, a este Centro acuden hombres y mujeres que requieren trámites legales en los diferentes ámbitos

Las entrevistas aplicadas a las profesionales se diseñaron de manera que permitan a cada una de las áreas contar su experiencia personal en cada especialidad y a la vez



visibilizar el trabajo que como institución llevan adelante, cabe destacar que las profesionales cuentan con experiencia probada y las instituciones aplican en enfoque de género en su actuación, situación que garantiza que se consideren las relaciones de poder que están presentes en la violencia perpetrada hacia las mujeres que acuden a los centros.

La guía de preguntas buscó encontrar respuestas, dependiendo de la especialidad de cada profesional, sobre el número de usuarias atendidas mensualmente, el tipo de violencia que es más denunciada por las mujeres, si las mujeres conocen lo que es la violencia económica y patrimonial, cuáles son las mayores afectaciones a las mujeres, si se cuenta con todos los instrumentos para lograr una sanción a los agresores y si la ley está siendo aplicada en los casos de violencia económica y patrimonial, así también si los mecanismos de restitución y reparación son aplicables.

3.4.1 Resultado de las entrevistas a Psicólogas.

Las tres profesionales entrevistadas tienen una experiencia de más de 6 años de trabajo en el área de violencia.

Atenciones: mensualmente atienden entre 25 pacientes nuevas y 30 pacientes a las que realizan atención continua durante mínimo 10 sesiones (no todas terminan el número establecido de sesiones).

Tipo de violencia por la que solicitan atención: Las profesionales informan que la violencia más denunciada y por la que llegan en busca de ayuda las mujeres en la violencia física y la violencia psicológica o ambas.

Conocimiento sobre la violencia económica y patrimonial: Las profesionales manifiestan que este tipo de violencia no es reconocida por las mujeres, solo luego de la



intervención profesional realizada en el centro, las mujeres identifican que además de la violencia física y psicológica son víctimas de este tipo de violencia.

Las psicólogas consultadas, señalan que en la institución se ha definido que el primer paso cuando las mujeres inician el proceso terapéutico es informarles lo que se conoce como el “círculo de la violencia” de manera que ellas puedan visualizar lo que están viviendo y vean un camino para salir de ésta situación.

La violencia económica y patrimonial según las psicólogas entrevistadas, está presente en situaciones descritas por las mujeres como:

“no me da dinero, yo tengo que mantener con mi mínimo trabajo, no da para sus hijos, no da para la comida, limitan los gastos, no reconoce el trabajo que hago, no pasa la pensión alimenticia, lo que gana se gasta en alcohol o drogas, gasta en prostitutas, tiene otro hogar, roba algunas pertenencias, esconde o vende los animales, vende las tierras y el dinero lo malgastan.” (M. Guzmán, comunicación personal, 21 de febrero de 2019)

Todas las profesionales del área psicológica consideran que el reconocimiento de la violencia económica y patrimonial en la ley no es suficiente para que ésta pueda ser sancionada, en primer lugar, porque las mujeres no la reconocen. Actos como romper celulares, quemar su ropa, romper objetos personales, televisores, puertas, entre otros, son vistos como normales en un momento de ira de los agresores, así también, las limitaciones que viven frente al acceso al dinero de sus cónyuges o convivientes, o la falta de pago de pensiones alimenticias no son identificadas como violencia económica. En segundo lugar, porque la sociedad en general y los asesores de justicia (que no tienen enfoque de género o experiencia en temas de violencia) tampoco identifican la violencia económica y patrimonial, por lo tanto, no la plantean dentro de los casos que llegan a defender.



Como consecuencia, las mujeres que han seguido procesos contra sus agresores, lo que consiguen son la boleta de auxilio y, máximo como medida de reparación, la asistencia psicológica “gratuita”. A las mujeres que por situaciones de violencia física han tenido que salir de sus hogares se les apoya para que puedan recuperar sus pertenencias, ésta acción la realizan con la policía especializada que acompaña a la persona para que con su resguardo proceda a recuperar su ropa, muebles y enseres del hogar.

El ejercicio de los derechos económicos y el derecho a una vida libre de violencia van más allá de lo que pueda estar establecido en la ley, si no se trabaja para que exista un cambio estructural de la sociedad y las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres cesen, no se podrá garantizar ningún tipo de derechos de las mujeres. La ley no está siendo aplicada para los casos de violencia económica y patrimonial debido a que está naturalizada.

3.4.2 Resultados de las entrevistas a Trabajadoras Sociales.

Atenciones y tipo de violencia: De igual manera que en el caso de las profesionales en psicología, las personas entrevistadas que realizan trabajo social, mensualmente atienden a unas 35 usuarias que sobre todo acuden para denunciar violencia psicológica.

Las Trabajadoras Sociales se encargan de realizar la primera acogida, es decir, reciben a la usuaria y escuchan la situación que llevó a la mujer a pedir ayuda, se encargan de abrir una ficha para conocer algunos detalles del problema y brindan información a la víctima para que pueda decidir los pasos que va a seguir para iniciar un proceso legal o psicológico y en algunos casos ambos. En ciertas ocasiones, según el caso lo requiera, se encarga de activar las redes que existen para atender los casos de violencia intrafamiliar y de género en la ciudad, tales como: Hospital, Policía especializada en violencia, etc.

Las profesionales manifiestan que las mujeres en un primer momento, **no están en capacidad de reconocer la violencia económica y patrimonial** de la que son víctimas, que es necesario trabajar con ellas para que la identifiquen, luego de la intervención realizada con cada mujer, se consigue que tomen conciencia de que situaciones como: no pagar las pensiones alimenticias, negarles la posibilidad de trabajar, control de todos los recursos económicos que ellas pueden generar, no cubrir los gastos de alimentación y educación de sus hijos, destrucción de electrodomésticos y muebles, quemar la ropa inclusive tratar de incendiar la casa deben ser reconocidos como violencia económica y patrimonial. Sin embargo, este tipo de violencia es vista por las mujeres sobre todo como parte de la violencia física.

Uno de los objetivos fundamentales del trabajo institucional, es la **restitución de los derechos de las mujeres**, se ha trabajado fundamentalmente en la inserción de éstas a labores remuneradas, para ello se trazan objetivos específicos que puedan cumplirse entre los cuales está la capacitación en oficios o emprendimientos con baja inversión pero que les permitan obtener recursos que posibilite su autonomía económica. La búsqueda de autonomía económica es parte del trabajo que se realiza, pero lo más importante es que consigan un empoderamiento que les permita salir de la violencia, se trabaja con las mujeres para que puedan visibilizar que el trabajo de cuidado no debe recaer solamente en ellas, pues muchas ocasiones la dedicación a las tareas de cuidado limita sus posibilidades de generación de ingresos.

“Como Trabajo Social lo que hacemos, es hacer el acompañamiento, tener el apoyo en lo que es las redes institucionales, donde ellas puedan acceder a los talleres o puedan acceder a una situación de capacitación, para que ellas estén acordes para poder tener sus propios ingresos.” (X. Otavalo, comunicación personal, 21 de febrero de 2019)

No existe de parte del Estado un trabajo relevante para garantizar la restitución de los derechos económicos de las mujeres, lo que se consigue es solo el alejamiento del agresor mediante las boletas de auxilio y en ciertas ocasiones la obligación de acudir a apoyo psicológico, en los casos en los que se establece una pensión alimenticia, ésta disposición no siempre se cumple.

“Hay muchos hombres que han dicho, llévame a la cárcel, me he de ir a la cárcel pero no te he de pagar la plata, entonces las mujeres tiene tan arraigado eso que ni siquiera quieren reclamar eso, su derecho, porque ellas dicen para que me diga eso, ya me ha dicho un montón de veces, mi guagua ya está grande ya mismo va a acabar el colegio ya para qué” (J. Ayabaca, comunicación personal, 26 de febrero de 2019)

Cuando la mujer ha logrado su empoderamiento, muy pocas de ellas deciden volver a sus casa y conseguir que el agresor abandone la misma, esto lo hacen, siempre y cuando cuenten con medidas de protección, pero lamentablemente, la víctima es la que termina saliendo de su hogar y dejando todo atrás, porque no quieren regresar a esa situación, como consecuencia de la salida de sus hogares, las mujeres pierden temporal o permanentemente el uso y disfrute de sus bienes.

La ley es importante, pero lo principal es la educación inclusiva que permita a las mujeres romper los estereotipos de género, la violencia no es un tema de la familia, es un tema de Estado, que debe incluirse en las mallas curriculares para desnaturalizarla.

3.4.3 Resultados de las entrevistas a Abogadas.

Las abogadas entrevistadas tienen una experiencia que va de 2 a 20 años en la institución.

Atenciones y tipos de violencia: mensualmente atienden a unas 30 usuarias que sobre todo acuden para denunciar violencia física y psicológica, normalmente reciben a las



usuarias que requieren poner una denuncia y obtener medidas de alejamiento de los agresores.

Las personas que brindan atención en el área legal cuentan con protocolos muy bien definidos para actuar en los diferentes casos de violencia, todas ellas han recibido formación en género y se debe resaltar que una de las abogadas además cuenta con una Licenciatura en Género y Desarrollo. Las profesionales manifiestan que las mujeres en un primer momento no tienen claridad de los pasos a seguir y muchas de ellas no denuncian a sus agresores ya sea por miedo, por pena o por la presión de los familiares de los agresores.

Conocimiento de la violencia: La constante con las tres profesionales entrevistadas es que la violencia económica y patrimonial no es ni siquiera percibida por las víctimas, ellas no reconocen actos de control económico como una forma de violencia, no llegan solicitando apoyo para denunciarla, se dan casos como que una pareja tenga un negocio en el cual las mujeres aparecen solo como una empleada más, no tienen control de los recursos generados, esta situación las hace dependientes económicamente lo que a su vez genera un daño emocional.

“...la violencia patrimonial no es una violencia que uno puede denunciar como una contravención, hay que identificar para buscar el camino a través de las diferentes instituciones jurídicas para lograr que la mujer no sea violentada también en este plano económico.” (B. Orellana, comunicación personal, 20 de febrero de 2019)

“entonces a la usuaria se le explica las opciones legales que tiene también, se le da el amparo psicológico para que pueda empoderarse tomar la decisión y alguna opción legal una demanda en la vía civil o los juzgados de familia para poder cesar digamos así la

violencia patrimonial y poder exigir lo que le corresponde hablando económicamente” (P. Tenesaca, entrevista personal 23 de febrero de 2019)

El reconocimiento de la violencia económica y patrimonial en la ley no es suficiente para que ésta sea sancionada y para que las mujeres puedan ejercer sus derechos económicos, no se conocen casos que se hayan denunciado como violencia económica y patrimonial, lo que se acostumbra por parte de las abogadas es incluir ciertos daños a la propiedad, ciertos perjuicios causados a las mujeres como violencia psicológica de esta manera mediante un proceso rápido y expedito se obtienen medidas administrativas de protección y medidas de reparación en un tiempo que va de 24 a 48 horas.

“...existe un vacío porque la violencia patrimonial y económica es bien amplia, consideró que se tiene que delimitar bien para que tenga, digamos así, herramientas legales eficaces porque todavía no, no sé cuenta en realidad con medios, con normativa” (P. Tenesaca, comunicación personal, 23 de febrero de 2019)

Acciones: Puesto que los casos de violencia económica y patrimonial no son fáciles de demandar, lo que se hace es tratar de mediar con los agresores en cuanto a que cedan en ciertos puntos, esto para nada significa que se haga una mediación de la violencia, porque la violencia no es negociable, se ha trabajado con algunos hombres para que ellos por ejemplo reconozcan el aporte económico de sus parejas para la construcción de bienes inmuebles de los cuales ellos aparecen como propietarios y de esa manera se realice una compensación económica.

En la mayoría de los casos, los derechos económicos no son sujetos de reparación ni restitución, en pocos casos se logra que las mujeres puedan recuperar sus bienes retenidos en el hogar o que se realice la reparación integral por los bienes destruidos, porque han sido denunciados dentro de la violencia psicológica.

“...no es únicamente la creación, crear un tipo o que exista la ley para que ésta pueda cesar, sino además de tener un mayor conocimiento de lo que se trata la violencia patrimonial y lo que la existencia de la misma significa, porque todos los días vemos, todos los días pasa, pero no le ponemos nombre, no sabemos lo que es, entonces si considero que es importante que sea conocido, sea divulgado...que las persona sean capacitadas en el término para que lo puedan incluso detectar.” (P. Tenesaca, comunicación personal, 23 de febrero de 2019)

Al momento, establecer la violencia económica y patrimonial resulta complejo, porque se tiene que recurrir a lo señalado en el Código Civil en relación a la legislación de Familia, normativa que en ciertos casos pueden crear confusión, manipulación y hasta contradicción, se debe procurar un trámite expedito con una delimitación efectiva que permita demostrar las relaciones de poder que están intrínsecas en la violencia.

3.5 La violencia económica y patrimonial vista desde los operadores de justicia.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la entrevista era indagar respecto a la experiencia de personas con competencia para juzgar casos de violencia y las decisiones o medidas tomadas para la protección de derechos, se acudió a un servidor judicial en calidad de Juez de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar de Cuenca, quién luego facilitó la entrevista con una Jueza colega del Juzgado de Violencia, se aclaró que la información es confidencial y que de ninguna manera implicará una valoración personal o profesional de quienes participan en la investigación, se señaló que se omitirían los nombres, y se solicitó la autorización para grabar las entrevistas.

Estas personas tienen 6 años en los juzgados de Violencia, lo que garantiza que la información brindada se basa en la experiencia adquirida a lo largo de estos años en temas relacionados a la violencia económica y patrimonial.

Los entrevistados basándose en la experiencia del trabajo en temas de violencia, manifiestan que un problema es el desconocimiento de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la violencia contra la Mujer por parte de la gran mayoría de las y los abogados en libre ejercicio, así también mencionan como otro inconveniente el desconocimiento de los temas de género, porque sigue predominando el sistema patriarcal que invisibiliza los problemas de las mujeres que son víctimas de la violencia pero sobre todo del ejercicio de poder en todos los ámbitos.

Con las reformas al COIP artículo 159 en el inciso tercero, se establece una Contravención para sancionar a una persona cuando realiza un deterioro de los bienes que pueden ser de la sociedad conyugal o de la pareja en unión de hecho, sin embargo, se ha enfocado como un tema de destrucción de bienes patrimoniales pero no se analiza el concepto de una violencia patrimonial para la cual no existe una sanción. Si bien consta como una de las formas de violencia en la ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la violencia contra la mujer, no obstante de ello, en la práctica resulta muy difícil obtener algún resultado respecto a este tipo de violencia, puesto que para estos casos en el derecho existe la materia civil que maneja estrictamente el tema de bienes y la ley prevé cierto formalismo para temas de la propiedad. Entonces, eso hace que el tema de violencia patrimonial no pueda ser fácilmente manejable a efecto de establecer detrimentos en el patrimonio porque siempre está de por medio también el tema civil.

Se podría considerar que hay una debilidad para poder aplicar la ley en los casos de violencia económica y patrimonial, esto debido a que en la Ley 103 promulgada en 1994 si existía una protección de manera genérica a la violencia psicológica y dentro de ésta a la violencia patrimonial en el caso específico de destrucción de bienes, en la actualidad no hay una normativa que proteja a las mujeres. Sin embargo, un avance para las mujeres



es que se reconozca la calidad de víctimas, lo que permite que puedan ejercer sus derechos a la denuncia si requerir de una o un abogado, en otras palabras, que la víctima esté presente en todo el proceso.

“si es que no existe un tipo penal punitivo para poder solventar la violencia patrimonial no es posible la reparación, entonces, está todo supeditado a un trámite eminentemente civil en las Unidades de Mujer, Niñez, Familia y Adolescencia. Es decir, salió de la esfera punitiva, que para mí fue un retroceso grande. Todavía existe control respecto del patrimonio de las mujeres ...no tienen el control sobre los bienes y las mujeres comúnmente cuando sufren violencia quedan en la calle, sin la posibilidad ni siquiera de que se restituyan ciertos bienes de uso fundamental por lo tanto, incluso no hay, tal vez se podría decir que en la reforma última que hubo el 5 de febrero del 2018 que la nueva ley justamente, en la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación contra la Violencia a la Mujer, únicamente lo que hizo es insertar en el artículo 558 en las medidas de protección unas adicionales en las que se refiere respecto de mandar a devolver ciertos bienes, nada más ahí, pero respecto a la reparación, no está contemplado.” (F. Guaraca, comunicación personal, 25 de febrero de 2019)

Medidas: En algunas ocasiones, para proteger a la víctima que está en desventaja, se fija una pensión de subsistencia, como una forma de resguardo, porque muchas mujeres no están en el campo laboral y no tienen ingresos propios y en caso de una separación de pronto se ven en situaciones económicas precarias.

“...una forma que nosotros tenemos para proteger a la mujer que vemos que está en una posición de desventaja frente a su pareja, es fijar una pensión de subsistencia, que muchas veces ni siquiera es solicitada por su abogado, tenemos la facultad para dictar

esta medida, una decisión que puede solventar las necesidades de la mujer hasta que ella consiga salir adelante” (A. León, comunicación personal, 28 de febrero de 2019)

Los operadores de justicia manifiestan que el desconocimiento de la ley y de temas de género por parte de los profesionales del Derecho, hasta cierto punto impide que se identifique las relaciones de poder que están presentes en los casos de violencia económica y patrimonial.

“...realmente el desconocimiento es mayoritario de los abogados en libre ejercicio, no solo de la ley, sino del tema de género fundamentalmente, a veces poco interés a veces se cree que el género no es importante, no se concibe, no se conoce, no se tiene idea de lo que es el género dentro de este sistema patriarcal” (A. León, comunicación personal, 28 de febrero de 2019)

3.6 Análisis de la información.

El Ecuador tiene un gran avance en cuanto a protección de derechos, la Constitución del 2008 integra principios y derechos de manera transversal a lo largo del texto constitucional, como por ejemplo, el principio de equidad de género entre hombres y mujeres en los ámbitos como salud, educación, trabajo, empleo, producción, entre otros, de igual manera, en lo que respecta a temas de violencia con la expedición de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres procura brindar protección no solo en las esferas física, psicológica y sexual, sino también, en lo que se refiere a los derechos de propiedad de bienes y recursos para su supervivencia personal, así como la de sus hijos e hijas, a pesar de ello, las mujeres en su vida cotidiana sufren detrimento de sus derechos pues la igualdad jurídica no es suficiente, se requiere de la igualdad real en el ejercicio de sus derechos, en otras palabras, la existencia de la ley no es suficiente para que éstas tengan una vida libre de violencia.



En la investigación realizada se determina que las mujeres identifican únicamente la violencia física y psicológica y que debido al desconocimiento de lo que implica la violencia económica y patrimonial ésta pasa desapercibida.

Las mujeres entrevistadas durante el tiempo que estuvieron viviendo con sus parejas generaban ingresos económicos, sin embargo no tuvieron autonomía económica, sus ingresos fueron utilizados por sus convivientes y dispuestos para el sustento familiar y en ocasiones se invirtieron en bienes de los cuales no pudieron disponer al separarse.

Ninguna de las mujeres pudo ejercer sus derechos económicos, no contaban con suficientes recursos para mantener una calidad de vida adecuada, mientras se mantuvieron en la relación de pareja, perdieron lo poco que alcanzaban a adquirir con su trabajo.

Las instituciones que brindan asesoría y atención a las mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de Cuenca cuentan con un servicio integral, que está diseñado para atacar el problema de la violencia hacia las mujeres con un enfoque de restitución de derechos, esta metodología de trabajo permite que desde el área psicológica se consiga el empoderamiento de la víctima para que pueda salir del círculo de la violencia en la que vive, las mujeres obtienen conocimiento sobre los diferentes tipos de violencia y adquieren herramientas para enfrentarlo.

El apoyo desde el área legal permite que a través de la aplicación de las leyes logren frenar los abusos de poder de los agresores mediante las medidas de protección y reparación contempladas y aplicables a cada caso en particular, así también, con el apoyo brindado desde el área de trabajo social se vean fortalecidas en los ámbitos de capacitación y emprendimientos que de cierta manera les permitirán obtener un grado de autonomía económica.



Las profesionales consultadas concuerdan en que la autonomía económica por sí sola no es suficiente para que las mujeres puedan salir del círculo de violencia en la que viven, sin embargo es un camino, señalan que el problema radica en el desequilibrio de poder que se mantiene entre hombres y mujeres, y la naturalización que se da a la violencia de todo tipo, manifiestan que se requiere un cambio cultural que elimine los estereotipos de género que mantiene a las mujeres en una posición de desventaja.

Las instituciones consultadas cuentan con procedimientos claros para el trabajo especializado con víctimas de violencia intrafamiliar y de género, a continuación se presenta un cuadro de los procesos que llevan adelante las instituciones antes mencionadas:

Tabla 1. Procesos de Actuación de Centros de Atención a Víctimas de Violencia

PROCESOS DE ACTUACION ESTABLECIDOS	DE CORPORACION MUJER MUJER	A CASA ACOGIDA MARÍA AMOR	DE CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
Primera Acogida a las Víctimas de Violencia	✓	✓	
Derivación de los casos de acuerdo a la necesidad: Área Psicológica o Área Legal	✓	✓	✓
Intervención con las mujeres para darles a conocer temas sobre violencia	✓	✓	✓
Asesoría y representación Legal	✓	✓	✓
Proceso Terapéutico	✓	✓	✓



Coordinación interinstitucional para capacitación	✓			
Seguimiento y acompañamiento	✓	✓	✓	✓

Autoría Propia

Por su parte, los operadores de justicia reconocen que si bien se han dado avances en algunos aspectos, la ley aún tiene vacíos que dejan a las mujeres desprotegidas frente a la violencia económica y patrimonial. Coinciden en que la forma en la que se pueden conseguir medidas de protección y reparación es presentando la denuncia por ejemplo de daños a los bienes utilizando el art. 159 del COIP numeral 3 como parte de la violencia psicológica, de esta manera las medidas se dictan en un plazo de 24 a 48 horas.

Estos servidores de la Función Judicial señalan que se requiere un mayor conocimiento de la ley por parte de las y los abogados en libre ejercicio y que éstos deben tener un conocimiento aunque sea mínimo en Género para que puedan defender o acusar considerando como agravante el ejercicio de poder de los agresores.

Capítulo 4

4. Conclusiones y recomendaciones.

El objetivo planteado para la presente investigación pretendió conocer las consecuencias que para la vida de las mujeres tiene, la ausencia de regulación de la violencia económica y/o patrimonial, en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos económicos, sin embargo, se debe mencionar que desde febrero del 2018, la Violencia Económica y Patrimonial está definida como un tipo más de violencia dentro de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Frente a esta realidad, a continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones referentes a este tema.

4.1 Conclusiones:

1. La investigación realizada permite concluir que el reconocimiento de la violencia económica y patrimonial en la Ley no es suficiente para garantizar el goce de los derechos económicos de las mujeres. La expedición de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres evidentemente implica un avance en cuanto a la garantía de sus derechos económicos, debido a que en ella se define a la violencia económica y patrimonial y además se establecen ejes de intervención centrados en la prevención y reparación. Sin embargo de ello, la violencia económica y patrimonial está completamente naturalizada puesto que las mujeres desconocen el significado de este tipo de violencia, por lo tanto, son víctimas de hechos que afectan no solo sus derechos económicos y patrimoniales, sino en muchos casos la posibilidad de su supervivencia y la de sus dependientes en condiciones dignas.

2. La incorporación de la violencia económica y patrimonial en el marco jurídico ecuatoriano constituye un avance significativo, sin embargo, todavía se encuentran obstáculos, para la aplicación de la Ley debido a que:

- No hay una diferenciación entre estas dos formas de violencia.
- No hay un mecanismo penal para sancionar estos tipos de violencia
- Se desconocen los mecanismos de protección que la ley prevé ya que quedan en medidas administrativas de protección y reparación.

3. El desconocimiento por parte de las mujeres de estos tipos de violencia (económica y patrimonial) provoca que éstas no busquen respuestas para este tipo de problemáticas, por lo tanto, no la denuncian. Las mujeres acuden a los centros de atención así como a las instancias judiciales para denunciar otros tipos de violencia como las física y la psicológica, las cuales son más conocidas y para las cuales si encuentran respuestas como son las medidas de protección y restitución que varían de acuerdo a cada caso y frente a las cuales las mujeres están satisfechas.

4. Las instituciones que trabajan en atención a víctimas de violencia realizan acciones para concientizar a las mujeres de los hechos que se constituyen en violencia económica y patrimonial y sus afectaciones, sin embargo, no consiguen que las víctimas tengan mayor interés por denunciarla, puesto que en un primer momento, lo que más interesa a las mujeres es precautelar su integridad física y psicológica, por ejemplo, mediante la expedición de una boleta de auxilio.

5. Que si bien, la violencia económica y patrimonial están reconocidas legalmente, aún no están tipificadas en el COIP. Algunos jueces y juezas en la administración de justicia, pese a que no han recibido denuncias sobre violencia económica y patrimonial, buscan la manera de proteger y precautelas los intereses de las víctimas de esta violencia, dictando

medidas como la fijación de una pensión de subsistencia dentro del tratamiento de denuncias por violencia psicológica o física, esto a pesar de que no existan pedidos expresos para ello.

6. En el transcurso de esta investigación, en el marco jurídico ecuatoriano se incorporó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (ver Capítulo 1) que en el artículo 10 reconoce en un solo tipo a la violencia económica y a la violencia patrimonial, lo cual genera ciertos límites para aplicarla, porque son dos formas diferentes violencia. La primera hace referencia los medios de subsistencia diaria de las mujeres, en tanto que la segunda, afecta a su sostenibilidad, a su desarrollo económico, a su autonomía económica, por lo tanto, al haberse incorporado en la ley de violencia en un solo concepto las dos formas de violencia no se resuelven ni se identifican los problemas de fondo de cada tipo de violencia, lo que trae como consecuencia que las mujeres no estén debidamente protegidas, se reconoce que hay un avance, pero no es suficiente.

4.2 Recomendaciones.

Con base a lo expresado en el acápite de conclusiones, se plantean las siguientes recomendaciones para el mejor tratamiento de la violencia económica y patrimonial:

1. Según lo expresado en el desarrollo y conclusiones del presente estudio respecto del desconocimiento por parte de las mujeres de lo que es la violencia económica y patrimonial, se recomienda al Estado (dando cumplimiento a su obligación de proteger los derechos) crear un programa articulado de información, promoción y difusión de los derechos económicos, derechos de propiedad y derechos patrimoniales, así como, de las formas de violencia económica y patrimonial y los mecanismos de protección. Propuesta que debe orientarse a promover el empoderamiento de las mujeres y consecución de su autonomía económica. Propuesta que debería ser llevada adelante por la recientemente



creada Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia en coordinación con organismos como la Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género.

2. Que las universidades incorporen dentro de sus mallas curriculares materias de Género con carácter de aprobación obligatoria para las y los futuros profesionales en Leyes, Psicología y Trabajo Social. Obligatorias de manera que puedan visualizar de forma integral los problemas que la violencia ocasiona a las mujeres, pero sobre todo en el tema de la violencia económica y patrimonial que presenta características diferentes a otros temas relacionados con la propiedad y los bienes que deben ser tratados desde en los procesos civiles.

3. Es necesario promover una reforma a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para separar estas dos formas de violencia que actualmente aparecen como una sola dentro de la definición de violencia económica y patrimonial (art. 10) y establecer con claridad parámetros que las diferencian lo cual repercutirá en la protección adecuada de los recursos y los bienes de las mujeres. Además se recomienda una reforma al Código Orgánico Integral Penal para incorporar la violencia patrimonial como un delito para que se establezca claramente la sanción correspondiente para cada infracción.

4. Por último, se recomienda que la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia en coordinación con las instituciones responsables de los temas de violencia, desarrollen los instrumentos técnicos necesarios y de fácil aplicación para las organizaciones que apoyan a las mujeres, que permitan obtener información veraz y oportuna sobre los casos de violencia económica y patrimonial, que se generen estadísticas que visibilicen la problemática, y que se establezcan los mecanismos



eficientes para evaluar la implementación de la Ley de violencia y el impacto que está tiene en la vida de las mujeres.



Referencias Bibliográficas

- Albuja S, E. M. (12 de 01 de 2019). *2448-5799-conver-25-78-13.pdf*. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v25n78/2448-5799-conver-25-78-13.pdf>
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas. (1992). *Recomendación 19 CEDAW*.
- Andrade, S. (s.f.). Delimitación de la Tutela del Derecho de Propiedad en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar .
- Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. (junio de 2007). *Artículo 1 Convención CEDAW*. Uruguay: Ministerio de Desarrollo Social. Instituto Nacional de las Mujeres.
- Asamblea Constituyente de Ecuador. (20 de octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito, Ecuador: Registro oficial 449.
- Cagigas, A. (2000). El Patriarcado como origen de la Violencia Doméstica. *Monte Buciero*, 307-318.
- Camacho, G. (2014). *La Violencia de Género Contra las Mujeres en el Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres*. Quito: El Telégrafo.
- CEPAL. (2015). *Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigesimotercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en los países de América Latina y el Caribe* (L. Santiago de Chile .
- CEPAL. (25-28 de octubre de 2016). XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. *Autonomía de las Mujeres e Igualdad en el Agenda de Desarrollo Sostenible*. Montevideo, Uruguay: CEPAL.
- CEPAL. (2019). *Informe de la 58 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe*. Santiago.
- Código Orgánico Integral Penal. (13 de Febrero de 2014). Quito, Ecuador: MJDHC.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (3 de noviembre de 2011). *El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: La ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales* . Recuperado el diciembre de 2018, de <https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresdesc2011.pdf>
- Contreras Díaz, J. y. (2011). *Derechos Patrimoniales de la Mujer. Guía para su Ejercicio*. Quito: FLACSO.
- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. (1995). Declaración Política y Documentos resultados de Beijing+5. ISBN: 978-1-936291-94-6. Naciones Unidas .
- DEERE, C. e. (2010). *DERECHOS DE PROPIEDAD Y ACUMULACIÓN DE ACTIVOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE SU CICLO DE VIDA: VIOLENCIA PATRIMONIAL EN ECUADOR*.



- Deere, C., & Contreras, J. y. (2014). Género, estado civil y la acumulación de activos en el Ecuador: una mirada a la violencia patrimonial. *Eutopía - Revista de Desarrollo Económico Territorial*.
- Ecuador, R. d. (2007). Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. Quito, Ecuador.
- Flores, A. e. (2012). Violencia Patrimonial de Género en la pequeña propiedad (Tlaxcala, México). *El Cotidiano*, 8.
- INEC. (2012). *Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo-ENEMDU*. Quito.
- Informe Sombra al Comité de la Cedaw Ecuador. (2014). *Coalición Nacional de Mujeres para la Elaboración del Informe Sombra de la CEDAW*. Quito.
- Ley 1257 de 2008. (04 de diciembre de 2008). *Diario Oficial No. 47.193*. Bogotá, D.C., Colombia.
- Ley contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer. (09 de abril de 2008). Decreto 22-2008. Guatemala: CENADOJ.
- Ley Contra la Violencia Doméstica (modificada por la ley 8925/11). (02 de marzo de 2011). Ley No. 7586 (1996) . *La Gaceta No. 42* . San José, Costa Rica : Asamblea Legislativa.
- Ley General de Accesos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (01 de febrero de 2007). *Diario Oficial de la Federación*. Mexico, México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
- Ley No. 779 Nicaragua. (20 de enero de 2014). *La Gaceta No. 19* del 30 de enero de 2014. Nicaragua, Nicaragua: Asamblea Nacional.
- Mujeres, C. E. (2017). *Informe Primer Debate del Proyecto de Ley Organica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres*. Quito.
- Naciones Unidas. (1979). Convencion sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
- Núñez, E. (2005). *Igualdad de Género en el goce de los DECS*. Lima: JM Comunicaciones.
- Organizacion de las Naciones Unidas . (2005). *Objetivos de desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América Latina y el Caribe* . Santiago de Chile.
- Parra, O. (2015). Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica. En C. d. Humanos, *Autonomía Económica, Pobreza, Desarrollo: La no Discriminación y los Derechos Sociales de las Mujeres* (pág. 251). Universidad de Chile.
- Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género. (10 de Septiembre de 2007). Quito, Ecuador.
- Plataforma de Acción de Beijing. (1993). *Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer*. Beijing.
- Rico, N. (1996). *Violencia de Género: Un Problema de Derechos*. CEPAL.



- SAGOT, M. (2000). *RUTA CRITICA DE LAS MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN AMERICA LATINA (ESTUDIO DE CASO DE 10 PAISES)*. Zeta Servicios Gráficos.
- Terán, P. C. (2016). *Documento con Propuesta de Reformas al COIP- Violencia contra las Mujeres*. Quito.
- Unidas, A. G. (2006). Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer., (pág. 37).



Anexos

Anexo 1. Consentimiento Informado

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
MAESTRIA EN GÉNERO Y DESARROLLO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En la ciudad de Cuenca, a los días del mes de de 2019.

.....

.....

(Nombres y apellidos de la persona entrevistada/encuestada)

Número de Cédula o Pasaporte.....,

Desde la Maestría en Género y Desarrollo ejecutada por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, y dentro del Trabajo de Titulación del/la maestrante: Alexandra del Rocío Rivera Orejuela, se lleva a cabo la investigación denominada “Consecuencias de la ausencia de reconocimiento legal de la violencia económica y/o patrimonial en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres” en este proceso usted ha sido seleccionada para participar en este proyecto. Las respuestas que proporcione a este cuestionario serán tratadas de forma anónima, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, y serán utilizados únicamente con fines estadísticos.

La entrevista durará aproximadamente.....

La encuesta durará aproximadamente.....

Agradecemos su disponibilidad para desarrollar esta actividad que tiene fines académicos.

.....
FIRMA DE LA MAESTRANTE

.....
FIRMA DE LA ENTREVISTADA



Anexo 2. Boleta de entrevistas

Cuestionario para aplicar entrevistas semi-estructuradas

Para la obtención de la información relevante a ser analizada, se utilizarán entrevistas semi-estructuradas a ser aplicadas a las víctimas de violencia económica y patrimonial, se utilizará la técnica de muestras tipo, determinándose el perfil de las usuarias de la Corporación Mujer a Mujer de la siguiente manera: una adolescente, una profesional, una mujer que tenga un emprendimiento y una mujer que viva en el área rural.

Se entrevistará a las profesionales que laboran en los centros de atención a víctimas de violencia como la Corporación Mujer a Mujer que cuenta con atención integral, por lo tanto se entrevistará a la psicóloga, trabajadora social y a las abogadas. Para el caso de Casa María Amor y Consultorio Jurídico gratuito de la Universidad de Cuenca, solo se entrevistará a profesionales del área legal.

Para completar la información, se entrevistará a dos jueces o juezas de la Sala de Violencia.

En todos los casos se explicará el objetivo de la entrevista y se solicitará la autorización por escrito de las personas entrevistadas, se guardará absoluta reserva de los nombres de las personas que colaborarán para la presente investigación, se solicitará el permiso para grabar la conversación.



1. Guía de preguntas para mujeres que han sufrido violencia económica o patrimonial

Objetivo de la entrevista Conocer las percepciones de las mujeres afectadas por la violencia económica y/o patrimonial sobre las respuestas encontradas en las instituciones garantes de la protección de derechos.

1. Nombre
2. Edad
3. Estado civil
4. ¿Tiene usted hijos?
5. ¿Cuántos?
6. ¿Son sus hijos menores de edad?
7. ¿Con quién o quienes vive usted?
8. Lugar de residencia Urbana o rural
9. ¿Su casa es propia o arrendada?
10. ¿A qué se dedica?
11. ¿Tiene usted ingresos propios?
12. ¿Qué tipo de violencia ha sufrido usted, han sido: golpes, patadas, control de gastos, no permitirle trabajar, control de llamadas o visitas, no permitirle tener amistades, gritos, insultos, decirle que usted no puede hacer nada bien, obligarle a tener relaciones sexuales?
13. ¿Qué tiempo lleva usted en esta situación?
14. ¿Aparte de lo descrito, ha tenido algún otro problema?
15. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido de la Corporación Mujer a Mujer?
16. ¿Ha encontrado usted alguna solución para su situación? ¿Su problema ha sido denunciado?



17. ¿Se ha podido hacer algo legalmente para solucionar su situación de violencia económica?

18. ¿Siente usted satisfacción con las respuestas dadas desde los juzgados?

2. Guía de preguntas para las profesionales de los Centros de Atención

Objetivo de la entrevista: Identificar las acciones implementadas por organizaciones de asistencia y servicios públicos especializados en violencia contra la mujer frente a los casos de violencia económica y/o patrimonial que experimentan las mujeres.

2.1 Guía de preguntas para las profesionales que brindan apoyo legal a mujeres víctimas de violencia de género en el Cantón Cuenca

1. Nombre
2. Años de experiencia en el Centro
3. ¿Cuántas mujeres atiende usted por casos de violencia en un mes?
4. ¿Qué tipo de violencia es la más denunciada en el Centro?
5. ¿La institución cuenta con un procedimiento para atender los casos de violencia?
6. ¿La violencia económica y patrimonial es una más de las otras formas de violencia, las mujeres pueden no identificarla fácilmente, el centro realiza acciones para que las mujeres una vez que identifiquen esa violencia, la denuncien?
7. ¿Cuáles son las mayores afectaciones que presentan las mujeres que tienen violencia económica?
8. ¿Considera que se cuentan con todos los instrumentos para sancionar la violencia económica?
9. ¿Considera usted que la Ley está siendo aplicada en los casos de violencia económica y o patrimonial?



10. ¿Cuáles son los mayores puntos críticos en los casos de violencia económica y patrimonial que usted ha enfrentado? y ¿qué acciones ha tomado la institución para enfrentarlos?
11. ¿Desde la expedición de la Orgánica integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuántos de sus casos han sido sentenciados como violencia económica y patrimonial?
12. ¿Considera usted que el reconocimiento de la Violencia económica y patrimonial en la ley es suficiente para que ésta pueda ser sancionada?
13. ¿Son aplicables los mecanismos de reparación y restitución de los derechos económicos de las mujeres, en el centro se toman acciones para exigirlos?
14. Si pudiera hacer recomendaciones para la mejora de la Orgánica integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en temas de violencia económica y patrimonial cuales serían.

2.2 Guía de preguntas para las profesionales que brindan apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia de género en el Cantón Cuenca

1. Nombre
2. Años de experiencia en el Centro
3. ¿Cuántas mujeres atiende usted por casos de violencia en un mes?
4. ¿Qué tipo de violencia es la más denunciada en el Centro?
5. ¿Aplica usted algún procedimiento para los diferentes casos de violencia?
6. Considera usted que ¿Las mujeres identifican la violencia económica o patrimonial como tal?
7. ¿Cuáles son las quejas o problemas de las mujeres que tienen violencia económica?



8. ¿Las mujeres que más sufren violencia económica y patrimonial son las más pobres o con menor formación educativa?
9. ¿Considera usted que el reconocimiento de la Violencia económica y patrimonial en la ley es suficiente para que ésta pueda ser sancionada?
10. Son aplicables los mecanismos de reparación y restitución de los derechos económicos de las mujeres que constan en la ley
11. Conoce usted si además de las disposiciones de que las víctimas de violencia reciban apoyo psicológico se han dictado medidas de reparación de los proyectos de vida de las mujeres
12. Qué se requiere para que las mujeres puedan “salir” de un proceso de violencia
13. Las mujeres que usted ha atendido han podido rehacer su vida fácilmente, que han requerido de parte del estado, la institución ha podido tomar medidas para la restitución de los derechos de las víctimas de violencia económicas

2.3 Guía de preguntas para las profesionales de la Corporación de Mujer a Mujer que brindan apoyo en trabajo social a mujeres víctimas de violencia de género en el Cantón Cuenca

1. Nombre
2. Años de experiencia en el Centro
3. ¿Cuántas mujeres atiende usted por casos de violencia en un mes?
4. ¿Qué tipo de violencia es la más denunciada en el Centro?
5. ¿Aplica usted algún procedimiento para los diferentes casos de violencia?
6. Considera usted que ¿Las mujeres identifican la violencia económica o patrimonial como tal?
7. ¿Cuáles son las quejas o problemas de las mujeres que tienen violencia económica?



8. ¿Cuál es su papel para apoyar a las víctimas de violencia económica y patrimonial que atiende en el centro?
9. ¿Considera usted que desde el Estado se pueden garantizar los derechos económicos de las mujeres víctimas de violencia económica y patrimonial?
10. ¿Conoce casos en los que las mujeres han recibido restitución o reparación de sus derechos vulnerados?

3. Preguntas para operadores de justicia.

Objetivo de las entrevistas: Analizar las decisiones y/o medidas que dictan las instituciones garantes de la protección de derechos frente a casos de violencia económica y/o patrimonial denunciados.

1. Nombre
2. ¿Cuántos años trabaja usted como juez o jueza de violencia?
3. ¿Con el reconocimiento de la violencia económica y patrimonial en la ley, se han presentado casos referentes a este tema para ser juzgados?
4. ¿Considera usted que ha habido avances o retrocesos para aplicar la ley en los casos de violencia económica y patrimonial?
5. ¿Qué tipo de sanción ha aplicado usted en las sentencias de casos de violencia económica y patrimonial?, ¿es factible la reparación o restitución de los derechos de las mujeres?
6. ¿Qué medidas a tomado usted para garantizar la protección de los derechos económicos de las víctimas de violencia?
7. ¿Cuáles son los vacíos que encuentra usted para aplicar la Ley cuando se denuncian casos de violencia económica y patrimonial?



8. ¿Las y los abogados tienen enfoque de género y conocimiento de la Orgánica integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para defender los casos de violencia económica y patrimonial?
9. ¿Cuáles son sus recomendaciones para una mejor aplicación de la ley en casos de violencia económica y patrimonial?